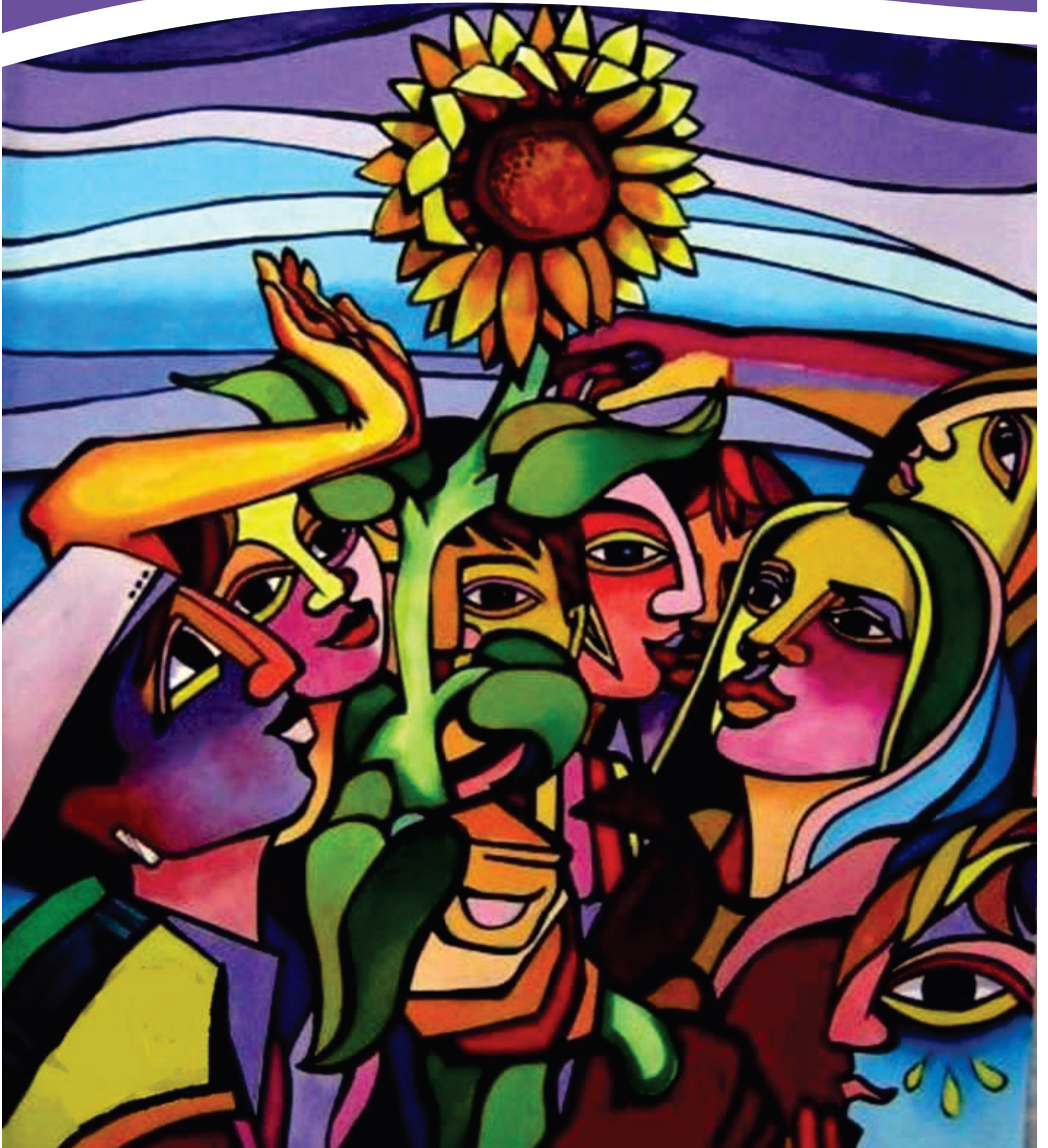


elcolectivo

5 años

Periodismo para la utopía

La lucha por un mundo mejor
es de todos los días



Contenido

Editorial	
La pelea es aquí y ahora.....	3
Elecciones en Bolivia. El fraude fue en la OEA.....	4
Los logros de la movilización popular en Chile.....	6
Las resistencias populares derrotan al régimen fantoche.....	7
Las Fiestas de la Cubanía y el bloqueo norteamericano.....	8
Colectivo Sumak Kawsay: semillas que florecen en el concreto.....	9
Desplazados y otra vez desplazados.....	10
El gobierno Duque pretende profundizar el modelo de negocio para la salud.....	11
La renovación urbana de Medellín o el tsunami de víctimas del “desarrollo”.....	12
Un Duque disfrazado de Leviatán.....	14
El talante antipopular del régimen. La Minga, el subpresidente y el Congreso de la Moda.....	15
Nuevo atentado contra la Estabilidad Laboral Reforzada.....	16
El genocidio como parte del paisaje.....	17
La injusta calificación del Sisbén se ensaña con Abelardo.....	18
Memoria en disputa.....	19
Poesía María Celene Rico.....	20
María Cano. Biografía ilustrada.....	21
Quintín Lame y su legado.....	22
En memoria de Cristina Bautista, Ombligarnos a la tierra para liberarnos con ella.....	23



La diferencia está en

confiar[®]
coop

www.confiar.coop

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Editor

Rubén Darío Zapata

Cómite Editorial

Anyela Heredia
Carlos Gustavo Rengifo Arias
Álvaro Lopera
Raúl Eduardo Martínez
Jhonny Zeta

Portada:

Pintura para el Colegio de Profesores
de Valparaíso (Chile) - Alfonso Luis Pajarito

Contraportada

Detalle de Mural en homenaje al Gitano Rodríguez -
Alfonso Ruiz Pajarito

Diseño y diagramación

Mery Murillo Alvarez

Colaboradores

Renán Vega Cantor
Alfonso Mena S.
José Abelardo Díaz Jaramillo
Jhon Mario Marín Dávila
Santiago Alarcón Serna
Luz Celina Alcaraz
Alfonso Ibañez
Everiel Loaiza
Jorge Álvarez
Betty Ciro
Juan D. Suárez Gómez
José Sierra
Edwin Díez
Wilma Almendra – Comunidad Nasa
Chucho Rivas

Editorial

La pelea es aquí y ahora

Una de las primeras cosas que hizo el expresidente Uribe después de ser notificado de su libertad (no de su inocencia) fue anunciar su programa político para la campaña presidencial de 2022. Dicho programa se reduce a un ataque frontal a la JEP y una reforma constitucional para acabar con las Altas Cortes. Es decir, profundizar el autoritarismo y garantizar la impunidad para sí y para el séquito de criminales de los que se ha rodeado desde siempre. Lo preocupante es que muchos sectores de la izquierda asumieron que efectivamente la pelea de ahora en adelante es electoral; de hecho, había ya, desde mucho antes, quienes planificaban todas sus acciones y estrategias orientadas a la campaña presidencial de 2022, convencidos de que la inconformidad que hoy se expresa en las calles contra el presidente Duque habría de traducirse en derrota electoral para la ultraderecha neoliberal que ha gobernado este país desde hace ya tantos años.

Pero hay poco realismo en tal esperanza. Primero, porque buena parte de la gente que se moviliza en las calles es antielectoral, pero también porque la derecha, que tiene muchísimos disfraces, se mueve perfectamente en esa arena. Por eso ahora empiezan a agitarse dentro de varios sectores de la clase política tradicional las propuestas de una gran coalición “democrática de centro”, con miras supuestamente a derrotar los extremos. Es una jugada política que pretende mostrar como salvadores a aquellos que por décadas han acabado con el país y han impuesto la corrupción, la inequidad y la pobreza. El discurso lo han venido construyendo desde hace años, presentando como radicales y extremistas los discursos y opciones políticas que han confrontado con mayor decisión y claridad no solo a la ultraderecha sino a todo el sistema de corrupción y a la politiquería que la ha hecho posible. Así que el propósito de dicha coalición pretende mantener las cosas tal y como están, pero apelando a un discurso supuestamente más incluyente.

Menos realista todavía resulta creer que los cambios estructurales que necesita este país se logran mediante un simple cambio de presidente a través de unas elecciones transparentes. Ello desconoce varios elementos fundamentales de la política hoy: primero, que no se puede contar en Colombia con elecciones transparentes. Hace ya varias décadas que el narcotráfico se coló en las campañas presidenciales, para el Congreso y para gobernantes locales. Lo que quiere decir, como ya han mostrado las declaraciones de varios paramilitares presos, que la mejor opción para ser presidente la tiene aquel que logre el mejor negocio con los narcos.

Pero desconoce sobre todo las prácticas políticas de la oligarquía, que en todas partes ha hecho hasta lo imposible por no dejar gobernar a aquellos que tienen ideas alternativas y orientan sus estrategias a resolver los problemas estructurales que mantienen a buena parte de la gente en condiciones de miseria, opresión y exclusión. Allende en Chile es el caso paradigmático y

antes que él, Árbenz en Guatemala. Más recientemente podemos sumar el caso de Chávez y ahora de Maduro en Venezuela, por si no fuera suficiente el infame bloqueo en que el imperio mantiene a Cuba desde el inicio mismo de la revolución; porque el ataque contra los gobiernos alternativos no proviene solo de la derecha capitalista de su país: frente a las posibilidades de transformaciones que afectan estructuralmente el proceso de acumulación de capital, los capitalistas de todo el mundo se comportan como una clase unida.

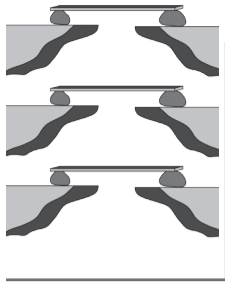
Así que un triunfo electoral de la izquierda solo es sostenible si se sustenta, más allá de los votos, en grandes procesos organizados de los sectores populares que se empoderen y estén en capacidad de defender el proyecto alternativo. Algo que, por supuesto, está muy lejos de ocurrir en Colombia, donde la desarticulación, y por tanto debilidad, de los procesos y organizaciones populares es crónica desde hace ya varios años.

Lo anterior no implica, desde luego, restarles importancia a los procesos electorales. Hay quienes aseguran que participar en las elecciones es legitimar esta democracia, pero tal y como está organizado este sistema, poco impacto tiene realmente esta actitud, aparte de que no se acompaña con alternativas concretas. En cambio, la indiferencia termina siendo garantía para que se mantengan en el gobierno los personajes y los partidos más desastrosos para los intereses de los pobres y oprimidos.

Las elecciones deberían, sin embargo, ser solo una de las estrategias de la izquierda, articuladas con todos los procesos de fortalecimiento organizativo y estratégico de los sectores populares. Es más, solo sería legítimo y probable un triunfo electoral de la izquierda si es el resultado de un proceso amplio de organización, movilización y articulación permanente de los pobres, obreros, ambientalistas, indígenas, negros, feministas, animalistas y todos los que estamos interesados en transformaciones estructurales en favor de la justicia y el bienestar.

Además, dicha victoria solo sería sostenible si transforma realmente nuestra cultura política y con ella las instituciones, sostenidas desde hace mucho en prácticas corruptas, clientelistas y mafiosas. De ello ha dado pruebas fehacientes y abundantes el Congreso de la República. No solo se quedó en la memoria de los colombianos el parte de victoria que daba Mancuso en 2004, cuando aseguraba que el 35% del Congreso era cuota paramilitar. Después, los congresistas investigados por parapolítica fueron instados por el propio presidente a votar los proyectos del gobierno antes de que los arrestaran. Las pruebas más recientes las constituyen la carta con la que un grupo de senadores usurparon la decisión del Senado en pleno a propósito de la autorización del tránsito de tropas gringas por el territorio nacional, y las estrategias descaradas con las que el presidente del Senado y los congresistas uribistas clausuraron la posibilidad del debate de moción de censura al ministro de defensa. Estos congresistas no llegaron al Congreso a pesar de ser corruptos e inmorales, sino precisamente por ser así. Porque la corrupción, el clientelismo, la traición y demás son elementos claves de la política en Colombia hoy.

Quienes aspiran a ser elegidos en los próximos periodos tienen ahora la oportunidad de articularse a las movilizaciones que desde las calles confrontan las políticas descaradas y autoritarias del actual gobierno y exigen su renuncia. Solo desde la dinámica de las propias organizaciones y los procesos populares se puede transformar de verdad la cultura política en la que hoy se sostiene la más infame opresión de las instituciones contra los pobres y en favor del gran capital. Los procesos populares son los escenarios legítimos para construir estrategias y programas políticos de largo aliento que nos ayuden a erigir un mundo a la medida de nuestros anhelos de vida digna y justicia planetaria. Lo demás es discurso. *EC*



4

Elecciones en Bolivia

El fraude fue en la OEA

Por Renán Vega Cantor

En las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo el 18 de octubre en Bolivia triunfó Luis Arce, el candidato del MAS (Movimiento al Socialismo). Los resultados oficiales indican que Arce obtuvo el 55.10% de votos, mientras que Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, el 28.83% y Luis Fernando Camacho, de Creemos, el 14%. Ha sido una paliza electoral y democrática la que el pueblo de Bolivia le propinó a la extrema derecha de su país, del continente y del mundo. Entre los derrotados se encuentran el gobierno de Donald Trump (y el imperialismo estadounidense en general), la Pandilla de Lima (en la que sobresale el régimen del subpresidente colombiano Iván Duque), la falsimedia internacional con sus opinólogos y expertos a sueldo, pero especialmente el Ministerio de Colonias de los Estados Unidos que se conoce como la OEA (Organización de Estados Americanos).

Triunfo contra la dictadura cívico-militar y mediática

Este triunfo adquiere un relieve especial por el contexto y las condiciones en que se logró, en medio de una dictadura criminal, que se implantó hace once meses, luego del desconocimiento del triunfo de Evo Morales en las elecciones presidenciales de octubre de 2019. Con anticipación a esas elecciones, la derecha boliviana, aupada por Washington, había manifestado que no reconocería las elecciones si ganaba Evo Morales, y eso fue lo que hizo luego de conocerse el resultado, en que el presidente fue reelegido con el 45% de la votación. Eso dio pie a una insurrección de la extrema derecha, encabezada por el candidato derrotado Carlos Mesa y por el racista Luis Fernando Camacho, de Santa Cruz. Esa insurrección terminó en un golpe de Estado, con la participación de la Policía y el Ejército que obligó a dimitir a Evo Morales. Este golpe contó con el respaldo de la OEA, en cabeza de Almagro, esa marioneta de los Estados Unidos que oficia como Secretario General.

La jugada de la OEA consistió en señalar que las elecciones habían sido fraudulentas y era necesario repetirlas. Aunque su triunfo era indiscutible, el gobierno legítimo de Evo Morales cometió el error de admitir la injerencia de Almagro y aceptó repetir las elecciones. A pesar de ese hecho, la extrema derecha no se detuvo y continuó con el golpe de Estado, el que culminó con la toma del Palacio Quemado por los golpistas.

Como para que no quedaran dudas de lo que querían, los golpistas entraron al Palacio con una biblia gigante, con anuncios de que nunca más iba a gobernar un indígena e iniciaron la cacería de brujas contra Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera e importantes funcionarios del gobierno depuesto. De inmediato esos golpistas empezaron a atacar a las bases sociales que apoyaban al MAS, con una represión brutal en la que la naciente dictadura asesinó a 37 bolivianos e impuso por la fuerza en la presidencia a Jeanine Añez.

El golpe contó con un variopinto apoyo, que iba desde la extrema derecha interna y mundial, hasta sectores del feminismo decolonial e intelectuales que se presentan como expertos en movimientos sociales y dicen apoyar las luchas indígenas. Falsimedia tradicional (prensa, radio y televisión), junto con las redes (anti)sociales, se convirtieron en los órganos de propaganda del golpe, al crear una matriz mediática que lo justificó, al recalcar como punto nodal que en las elecciones se había cometido un fraude monumental y eso lo había confirmado la OEA de Luis Almagro. Este fue el mantra que se repitió hasta el cansancio durante los once meses anteriores y se instaló como la "nueva verdad" de lo que sucedió en Bolivia, para recalcar que se justificaba el golpe, peor aún, que no fue golpe de Estado sino una renuncia voluntaria de Evo Morales, con lo que de manera implícita este reconocía el pretendido fraude que se le endilgaba.

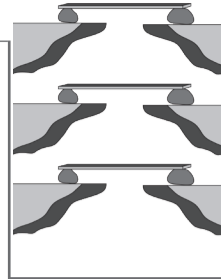
La farsa de la OEA

La intervención de la OEA en las elecciones de Bolivia de noviembre de 2019 es una ignominiosa página en la historia latinoamericana por el nivel de injerencia alcanzado, a favor de la extrema derecha y del imperialismo estadounidense y sus súbditos. Sin tener ningún soporte técnico y con estruendosas fallas metodológicas, la OEA habló de fraude cuando se detuvo el conteo electoral y mientras llegaban los resultados de zonas distantes del país, en las que Evo Morales obtuvo una gran ventaja. La noticia la dio como un hecho confirmado y no como una opinión y esa decisión se constituyó en la justificación de la insurrección de la extrema derecha, que se volcó hacia La Paz, con la participación de la Policía y el apoyo tácito de las Fuerzas Armadas.

A las pocas semanas, diversas organizaciones internacionales, entre ellas universidades de los Estados Unidos, demostraron las mentiras de la OEA, e indicaron que Evo Morales había ganado en forma limpia las elecciones. Claro, esos estudios quedaban como constancias históricas del fraude de la OEA, pero no podían detener el proyecto dictatorial en marcha, con su cortejo de represión y muerte.

Las elecciones del pasado 18 de octubre desnudaron la magnitud del fraude electoral cometido por la OEA, que condujo a una dictadura y a crímenes de lesa humanidad en el territorio de Bolivia, con el desconocimiento de la decisión soberana y democrática de la población de ese país. Dos aspectos prácticos comprueban las mentiras de la OEA. Primero, el triunfo inobjetable del candidato del MAS, el mismo partido de Evo Morales, con una mayor votación que la obtenida por el presidente legítimo un año antes, dato que adquiere más relieve si se tienen en cuenta las condiciones de represión y acoso en que se realizaron las elecciones.

Segundo, la OEA adujo que en las zonas rurales en que se demoró el recuento de votos en 2019 hubo fraude, pero en esas mismas regiones el MAS ganó nuevamente e incluso aumentó sus votos. Algunos ejemplos lo muestran. Así, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) efectuó un estudio comparativo entre las elecciones de 2019 y 2020, encontrando que, en los 86 recintos objetados por el informe de la OEA, el MAS alcanzó el 97% de la votación, en comparación con el 91.6% que había obtenido Evo Morales. En el mismo sentido, el Centro de Investigación en Economía y Política con sede en Estados Unidos (CEPR, por sus siglas en inglés), detectó que en 13 actas electorales de 2019 que



la OEA había señalado como fraudulentas, el MAS alcanzó la misma cantidad de votos, lo que establece de manera indiscutible que no hubo tal fraude.

Y esto a su vez confirma que lo que ha soportado Bolivia desde el 10 de noviembre del año anterior ha sido una criminal dictadura, impuesta por un golpe de Estado, y con un acumulado de odio y terror, con decenas de asesinados y centenas de heridos y encarcelados. A la OEA le cabe en consecuencia la responsabilidad directa de ese golpe de Estado y las masacres subsecuentes que se desencadenaron. ¿Cómo van a responder por esos crímenes la OEA y la Pandilla de Lima? ¿Será que, nuevamente, van a quedar impunes estos crímenes que propició y avaló el Ministerio de Colonias de los Estados Unidos? ¿El nuevo gobierno de Bolivia va a olvidar fácilmente la brutal injerencia de la OEA y no va a adoptar ninguna medida contra esa caduca organización que solo sirve a los Estados Unidos?

Triunfo sobre la posverdad

La otra gran derrotada en la jornada electoral del 18 de octubre en Bolivia ha sido la posverdad (es decir, la mentira) de falsimedia y compañía. Esta se había encargado de difundir numerosas mentiras, replicadas en miles de páginas virtuales apócrifas, creadas expreso para el caso de Bolivia, miles de las cuales desaparecieron luego de consumado el golpe de Estado del 10 de noviembre del año anterior.

Algunas de esas mentiras son las siguientes: el supuesto fraude electoral de 2019, la renuncia voluntaria de Evo Morales, no hubo golpe de Estado, y se había recuperado la democracia y expulsado a un tirano de izquierda... Para la muestra un botón colombiano. Beethoven Herrera Valencia, profesor de la Universidad Nacional, columnista de Portafolio (*El Tiempo*), declarado como el mejor profesor de economía

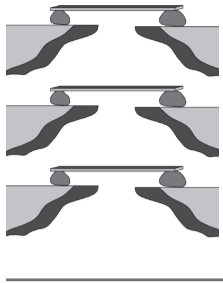
del país en 2009 por esa misma revista Portafolio y especialista en América Latina, publicó una columna en el mencionado periódico el pasado 14 de octubre, en donde dice esta perla: “Hubo serios indicios de fraude electoral identificados por una auditoría de la OEA avalada por la Unión Europea y, por ello, los militares le recomendaron a Evo renunciar, para frenar la ola de protestas y desmanes, lo que calificó como golpe de Estado”.

Es difícil encontrar tamaña síntesis de la infamia sobre lo acontecido en Bolivia, porque en unos cuantos renglones se reúne gran parte de las mentiras de la OEA y compañía que acaba de desmentir el pueblo boliviano en las urnas el 18 de octubre. Que se sigan diciendo tales mentiras, y por la pluma de un “experto”, después de los numerosos estudios independientes que comprobaron que en las elecciones presidenciales de 2019 el fraude fue de la OEA, indica el despiste de los opinólogos colombianos, un país en donde, entre otras cosas, el apoyo mediático al golpe contra Evo Morales en 2019 fue unánime.

Por eso, da grima el titular aparentemente cándido de El Espectador en su editorial del 20 de octubre: “El sorpresivo triunfo del MAS en Bolivia”. Más bien El Espectador y los miembros de la Falsimedia criolla, con sus opinólogos y expertos de cabecera, deberían hablar de “Nuestra sorpresiva y vergonzosa derrota en Bolivia”. ☹



Foto: AFP



Los logros de la movilización popular en Chile

6

Por Edwin Díez

Chile fue el experimento. Bajo la dictadura de Pinochet, a partir de 1973, se inició al desmonte del Estado keynesiano y el reparto, bajo formas altamente corruptas, de los bienes estratégicos del país a sectores privilegiados tanto de la burguesía civil como militar. De este modo se privatizó lo que otrora eran Bienes Comunes que operaban bajo la figura de bienes públicos y pasaron a manos de transnacionales y empresarios nacionales.

Representó este modelo un alto crecimiento del PIB en Chile, lo cual convocó a otras naciones latinoamericanas para imitar el modelo. Por su parte, las resistencias antineoliberales en las izquierdas organizadas en corrientes denominadas Progresistas y Socialistas Siglo XXI, se tradujeron en Neokeynesianismos y, por tanto, no asumieron el desmonte revolucionario de los Estados nacionales capitalistas, sino que se enfocaron en conservar lo que había sido privilegio pasado como Estado Social de Derecho y sus libertades democráticas. Al tiempo, los gobiernos progresistas buscaron preservar en manos de los Estados esos bienes estratégicos e impedir que se ejecutaran los procesos neoliberales privatizadores.

Este ha sido finalmente el proceso político que las izquierdas marxistas y liberales han tenido como proyecto revolucionario en los últimos 25 años. No ha sido ese caso, sin embargo, el caso chileno. La instauración del modelo neoliberal se ejecutó allí en el marco de la dictadura pinochetista y de los siguientes gobernantes en ejercicio de la Constitución emanada en dictadura.

Así pues, el proceso social en resistencia se viene gestando desde la movilidad social en formas autoconvocadas debido a la total pérdida de la credibilidad en los partidos políticos de centro e izquierda que, durante los últimos 30 años, actuaron fundamentalmente en cogobierno con los gobernantes representantes de las élites herederas de la dictadura. En este escenario aparece la invisibilizada resistencia ancestral Mapuche, que asume dentro de sus postulados la siguiente consigna: “No somos de Izquierda, no somos de Derecha, somos de la Tierra, somos Mapuches”. Esta consigna está antecedida por el principio según el cual los Partidos Políticos no se reconocen como la forma de organización política de los

oprimidos y agraviados, al considerarlos como modelo del ejercicio de la política en el Estado que les ha sometido y despojado. Los Mapuches, además, consideran que son una nación y que su modelo de organización social se basa en las Autonomías territoriales de carácter horizontal y no en el modelo jerárquico y vertical del Estado republicano.

En este contexto se da el estallido social de octubre de 2019 con el encuentro de los dos chiles escindidos: la Mapu y el Estado Chile, de sus dos comunidades: la originaria de cultura Tierra y la blanca y mestiza de cultura eurocéntrica. La primera en auge, en rescate de su ancestralidad y en lucha por la liberación de su territorio bajo un régimen estatal chileno que les ha declarado como terroristas, ha encarcelado a sus Lonkos (Cabezas) y Wichafes (Guerreros) y asesinado a jóvenes mapuches destacados como Matías Catrileo y muchos más. Los otros, los de abajo, los comunes, los proletarios, los estudiantes, los jóvenes, los ambientalistas, las feministas y en general las comunidades empobrecidas, silenciadas y reprimidas en la búsqueda de un mejor vivir del que fueron despojados en el ejercicio de la dictadura, están en la búsqueda de sus miles de desaparecidos, en el reencuentro con la memoria de sus miles de ciudadanos asesinados. Cantan nuevamente el canto de sus cantores sociales, Víctor Jara, Violeta Parra, Patricio Manns, Ángel e Isabel Parra, Inti Illimani, Los Prisioneros, Illapu, Quilapayún y su Cantata Santa María de Iquique, recordándoles las masacres pasadas y recientes, y otros tantos cantos, poesías y obras de creación colectiva que en conjunto son movimiento social haciéndose acción en las calles.

Perosihayunelementoarticuladordeestallido social no es otro que la derogación de la Constitución vigente que hace perpetua la dictadura. El elemento más representativo de esta Constitución es la Ley de Aguas, que generó todo el proceso de privatización del agua, dejando varadas incluso a las comunidades del norte desértico de Chile. El suministro de estas comunidades proviene de pequeñas fuentes superficiales que nacen del

deshielo de los glaciares de la lejana cordillera de Los Andes. Estos pequeños manantiales han sido por siglos fuente para la agricultura y el consumo de comunidades originarias Aymara y otras como el campesinado; pero ahora sus pequeños caudales son propiedad privada que pueden ser vendidos para los recientes monocultivos de aguacates o cualquiera de los agronegocios exportables de frutales, vinos, olivos y otras especies, o simplemente a las empresas mineras extractivistas.

Un fenómeno distinto se presenta en el Sur, territorio denominado como parte de la Walljmapu que posee en abundancia el agua en grandes lagos y ríos que corren caudalosos por las altas precipitaciones y deshielo de glaciares cordilleranos que han sido a lo largo de siglos sujetos sagrados en la cosmogonía mapuche. Privatizados hoy, se destinan a la generación de energía mediante represas. Lo anterior ha representado uno de los mayores conflictos territoriales de carácter ambiental; no solo ha movilizó a las comunidades mapuches sino al conjunto de los chilenos, pues sus territorios se han convertido en la base de uno de los mayores turismos paisajísticos del mundo (véase las luchas contra HidroAysen). La resistencia ambientalista que ha despertado a nivel mundial también se orienta hoy contra Pascua Lama, la megaminería de oro de Barrick Golds, que destruye los glaciares de la cordillera para obtener el agua que necesita en sus procesos mineros.

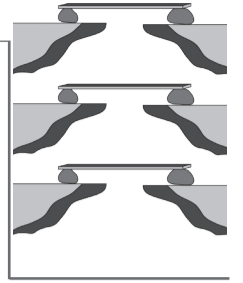
También se presentó desde la dictadura, y con los posteriores gobernantes, la destrucción de grandes extensiones de bosques nativos, con árboles que tienen más de 2.000 años, para el desarrollo extractivista de plantaciones de especies foráneas de pinos y eucaliptos. Hoy Chile es, de hecho, el segundo productor mundial de madera comercial, todo ello sobre la desaparición en forma extensiva de su limitada fauna y flora y produciendo modificaciones significativas de orden climático ya que el bosque nativo era el soporte de la alta humedad mientras que el monocultivo de coníferas, por lo contrario, absorbe las aguas subterráneas y minimiza las precipitaciones.

Todo esto y cientos de conflictos de orden socioeconómico fueron denunciados a lo largo de muchísimas movilizaciones en las calles clamando educación libre y gratuita, mejores sistemas de salud y pensiones, menores costos en transportes, derogación de leyes lesivas de la vida comunitaria. El gran logro de dichas movilizaciones fue la derogación de la Constitución y la formulación de una nueva encaminada a la equidad social, a los derechos de la Naturaleza, a la declaratoria de Estado plurinacional y otras medidas encaminadas al Buenvivir en la Ñuke Mapu (Madre Tierra).

De no obtenerse un nuevo Pacto Social que atienda a estas reclamaciones, seguramente se agudizarán los conflictos y podría suceder lo impensable. *EC*



Foto: EFE/ Fernando Bizerra Jr



De la minga en Colombia a los votos de los pueblos latinoamericanos Las resistencias populares derrotan al régimen fantoche

7

Por Luis Alfonso Mena S.

Los acontecimientos que sacuden las tierras de Nuestra América por estos días parece que estuvieran transcurriendo de soslayo para las élites que gobiernan a Colombia hoy, una élite representativa del bloque más rancio de la oligarquía bicéfala que compone el sistema de burgueses y terratenientes dueños del poder, enemigos de las resistencias populares. Ideal para las élites y su régimen que esos acontecimientos sean mirados de reojo por la mayoría, sin detectar su enorme significado para los pueblos y, particularmente, sin evaluar el mentís que significan para las políticas estratégicas de las clases dirigentes del continente.

Por lo menos cinco acontecimientos recientes ponen en evidencia los anteriores enunciados: la multitudinaria protesta ciudadana del 9 y el 10 de septiembre en Bogotá y otras ciudades del país; la contundente minga de las comunidades indígenas entre el 14 y el 21 de octubre, en conjunto con la jornada nacional sindical y popular de este día en Colombia; el arrollador triunfo del Movimiento al Socialismo, MAS, en la elección presidencial cumplida en Bolivia el 18 de octubre; la apabullante votación por una nueva Constitución en Chile el 25 del mismo mes, y la consolidación del proceso comicial para la renovación de la Asamblea Nacional en Venezuela, que se cumplirá el 6 de diciembre de este 2020.

Al servicio del imperio

La política exterior del Estado colombiano es totalmente dependiente de la del imperio estadounidense, por eso el gobierno participar de manera directa en la conspiración y la agresión contra la República Bolivariana de Venezuela.

Para ello entrega la soberanía nacional, permitiendo la presencia de tropas norteamericanas en nuestro territorio, incluso saltando tramposamente lo ordenado por la Constitución Política; arropa a centenares de mercenarios de la extrema derecha venezolana comandados por contratistas gringos; facilita burocracia y recursos del Estado para mantener en el país a los cabecillas de la conspiración, y se hace el de la vista gorda con los terroristas que incursionaron desde Colombia en las costas venezolanas de Macuto y Chuao en la llamada Operación Gedeón y fueron derrotados por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a principios de mayo de 2020.

En esa tarea Duque, el Ministerio de Defensa, la Cancillería y el aparato de Migración Colombia han estado al servicio de lo peor de la extrema derecha venezolana, y han participado de manera obsecuente en el llamado Grupo de Lima, al lado de Sebastián Piñera y de otros de su especie. El desastroso andamiaje intervencionista montado en la frontera colombo-venezolana el 22 y 23 de febrero de 2019 por el dúo Duque-Piñera así lo demuestra.

Esa hermandad conspiradora explica el hecho de que el gobierno colombiano jamás condenó la espantosa violación de los derechos humanos por parte de Piñera contra las diarias y multitudinarias manifestaciones del pueblo chileno, que

reclamaba desde octubre de 2019 condiciones dignas de vida. Esa represión que dejó más de 40 muertos, centenares de heridos y miles de detenidos por los herederos del dictador Augusto Pinochet.

Y explica también por qué, en cambio, Duque fue el primero en reconocer la dictadura de Jeanine Áñez, puesta en la Presidencia de Bolivia en noviembre de 2019, mediante una maniobra burda de Luis Almagro, el tirano de la Organización de Estados Americanos, OEA, y por los golpistas internos financiados por el gobierno norteamericano, en medio de otra represión brutal.

Paralelamente, a medida que avanza el tiempo de su oscuro mandato, Duque cierra cada vez con mayor cinismo los resquicios de “democracia”, desvertebra la hipotética “separación” de poderes, emula con una de las peores épocas del autoritarismo post Frente Nacional en Colombia, el gobierno de Julio César Turbay Ayala (1978-1982) y su nefasto Estatuto de Seguridad, al tiempo que busca implementar las políticas de su patrón, Álvaro Uribe, y su violenta Seguridad Democrática, eufemismo con el que se encubrió lo que realmente ocurrió en el mandato uribista (2002-2010): crímenes de Estado.

En desarrollo de esa política, Duque se negó a atender los reclamos de las movilizaciones sociales prominentes de 2019, las enfrentó con la maquinaria más avezada en la violación de los derechos humanos, el Esmad de la Policía, y no dudó en excusar las brutales acciones de esa fuerza en la represión de la indignación popular del 9 y el 10 de septiembre de 2020, desatada luego del asesinato a manos de dos agentes del régimen de un indefenso abogado en Bogotá. La masacre oficial dejó trece jóvenes asesinados.

Su política de arrogancia y exclusión frente a los sectores populares ha quedado en evidencia con la estigmatización descarada contra la minga indígena, a la que sus funcionarios le hicieron todo tipo de señalamientos, y a la cual, con evidente racismo y odio de clase, se negó a atender no solo en el Cauca y Cali, sino en Bogotá.

Las derrotas

Pero la demostración de organización dada por el Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, que dirigió la minga, y la clara confrontación política que ella significó contra y frente al régimen constituyó la primera derrota para Duque.

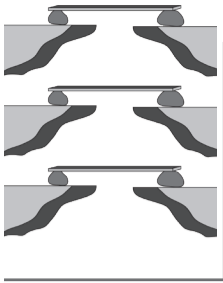
El triunfo de Luis Arce y David Choquehuanca, candidatos del MAS, con una votación mayor en las presidenciales de Bolivia de 2020 (54%) en comparación con la obtenida por Evo Morales en 2019, echó por tierra la ardid tramposa del cabecilla de la OEA en el sentido de que había habido fraude hace un año, y puso sobre la palestra la derrota de todos los que se solazaron con el golpe de Estado de extrema derecha que derrocó a Evo, empezando por el gobierno de Duque.

Ocho días después vino el demoledor triunfo del pueblo chileno contra el gran aliado sureño de Duque en la conspiración contra Venezuela, Sebastián Piñera: una votación de casi el 80% de los participantes en el plebiscito contra la pétrea Constitución heredada de la dictadura de Pinochet dejó la tercera gran derrota a la derecha continental, incluidos en ella Duque y su jefe, Donald Trump.

Ahora se avecina la cuarta derrota para el régimen uribista, la de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre en Venezuela, que se cumplirán a pesar del sabotaje, los montajes y las maniobras injerencistas del cerco orbital impuesto por Estados Unidos, con la participación en primera línea del servil gobierno de Duque. Ninguna de las acciones contra este ejercicio democrático, que dejarán totalmente sin piso político al monigote montado por Trump (Guaidó), han fructificado.

Así, pues, el injerencismo exterior del régimen colombiano está sufriendo derrota tras derrota a manos de los pueblos latinoamericanos contra los cuales se ha confabulado con Estados Unidos. Y en el plano interno, subrayo, la minga también derrotó a Duque retándolo en su propio terreno, así éste haya huido a dar una vuelta por el malecón de Quibdó, en el Chocó, para eludir el eco del reclamo indígena, a 50 metros de la Casa de Nariño. Un reclamo que sigue retumbando y se multiplicará este 21 de noviembre de 2020. *EC*





Las Fiestas de la Cubanía y el bloqueo norteamericano

Por Jorge Álvarez

El pasado 20 de octubre se celebró el día de la Cultura Nacional Cubana, reconocimiento que se realiza desde 1980, cuando se expidió el Decreto 74 en Consejo de Ministros del 22 de agosto de ese año, decisión que se tomó para hacer homenaje al Himno Nacional de Cuba, La Bayamesa. Se decidió además que la celebración fuera cada 20 de octubre, pues en esa fecha del año 1868 la ciudad de Bayamo fue liberada de la corona española por las tropas mambises, al mando de Carlos Manuel de Céspedes, quien les otorgó la libertad a sus esclavos y les convocó a unirse a la causa anticolonialista.

Un poco de historia

Otro aspecto importante de ese día, 20 de octubre de 1868, es que, al entrar las fuerzas liberadoras a la ciudad de Bayamo, el eufórico pueblo bayamés entonó las letras de una canción revolucionaria, que luego sería reconocida como el Himno Nacional de Cuba. La letra de La Bayamesa fue repartida en volantes por su compositor, poeta y revolucionario, Perucho Figueredo.

Carlos Manuel de Céspedes es llamado el Padre de la Patria, quien durante el proceso revolucionario sufrió la retención de su hijo Óscar de parte de los españoles que le chantajearon para que abandonara la lucha por la independencia, a lo que éste les respondió con su distintiva postura radical: “Óscar no es mi único hijo, soy el padre de todos los cubanos que han muerto por la revolución”. Días después su hijo sería fusilado.

Disfrutemos a Cuba, su gente, sus pueblos y ciudades

Fueron varios los eventos virtuales que en este año y en diferentes partes del mundo se realizaron para sumarse a las celebraciones

del Día de la Cultura Cubana y así homenajear a La Bayamesa, a Carlos Manuel de Céspedes y a su ciudad natal Bayamo, ciudad que se ha convertido en importante polo de atracción turística. Uno de sus principales atractivos culturales puede disfrutarse cualquier sábado por la noche en las calles de la ciudad, en las que se celebran las Fiestas de la Cubanía.

Pero el desarrollo de Bayamo se ha visto severamente afectado, pues también ha sido víctima del bloqueo gringo. Todo en Cuba ha sido afectado por el bloqueo norteamericano, nada ha quedado incólume. Precisamente homenajes como estos hacen parte de la campaña que se realiza desde Cuba y en todo el mundo para impulsar el fortalecimiento de la amistad y solidaridad con la Isla, pero igualmente para luchar contra todo aquello que atente contra la autonomía y soberanía de los pueblos.

¡A desmontar el bloqueo!

En este caso en particular se refuerza la campaña para que en la Asamblea de Naciones Unidas, una vez más, se apoye la propuesta de proyecto de resolución presentada por Cuba denominada “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”. En esta oportunidad y a causa de la pandemia de la Covid-19, el gobierno cubano ha decidido trasladar dicha consideración, de la fecha tradicional -entre finales de octubre y principios de noviembre- para mayo de 2021. Esta solicitud de resolución ha sido aprobada por abrumadora mayoría durante 23 años consecutivos. Colombia se ha sumado a la decisión mayoritaria en tal decisión, pero vergonzosamente en la votación realizada en 2019, conjuntamente con Brasil, se abstuvo de votar, apoyando de forma tácita la decisión asumida por Estados Unidos que siempre ha

ido de la mano de Israel en tales aberraciones históricas.

El imperialismo yanqui no ha querido aceptar la realidad, pues es quimérico lograr que Cuba regrese al sistema económico capitalista, en tanto los cubanos, luego de 60 años de construcción del socialismo, no van a permitir que se echen por tierra los avances que les han costado sangre, penurias y enormes esfuerzos. Como ya dijimos, es un pueblo que defiende sus derechos. El pueblo cubano, las generaciones viejas y nuevas van a permanecer unidas, no van a permitir que se les arrebaté logros y derechos adquiridos, además están convencidas que, como canta Silvio en El Necio, “dicen que me arrastrarán por sobre rocas / cuando la revolución se venga abajo / que machacarán mis manos y mi boca / que me arrancarán los ojos y el badajo”, pero morirán, así como vivieron: libres. Simple, conocen de sobra lo que les espera si la Isla cae nuevamente en manos del imperialismo yanqui.

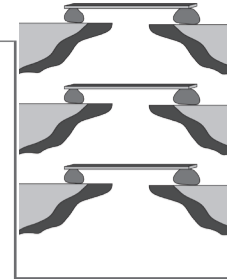
Es tal la sevicia del gobierno de Trump -ahora en época preelectoral- para satisfacer las apetencias de la reacción cubana de Miami, que éste ha incrementado aun más las sanciones contra Cuba, decidiendo durante los últimos días sumar nuevas medidas a las innumerables ejecutadas durante su mandato, que afectan enormemente las condiciones de vida del pueblo. De acuerdo con un informe tomado de Prensa Latina, entre ellas está el impedir a los viajeros estadounidenses alojarse en propiedades del gobierno cubano, impedir las importaciones de ron y tabaco cubano, y limitar las remesas enviadas desde Estados Unidos, situación que agravará la economía de las familias cubanas. Al igual que demandarán licencias específicas para ciertas categorías de viajes, como las relacionadas con la asistencia u organización de reuniones y conferencias profesionales.

El día de la cultura cubana: para celebrar, pero también para exigir

Es necesario dar continuidad a la denuncia permanente contra el gobierno de Estados Unidos por su reiterada decisión de mantener vivo el bloqueo contra Cuba, el cual refuerza con el pasar de los días, pues con su política pretende estrangular no solo la construcción de un nuevo modelo social, económico y político, sino a un pueblo entero digno y soberano.

Celebraciones como éstas, la del Día de la Cultura Cubana, además de festejarse, sirven también para exigir, para fortalecer la lucha contra el bloqueo, para seguir enaltecendo y robusteciendo la campaña de respaldo a la postulación del Contingente Internacional de Médicos Cubanos, la Brigada Henry Reeve, para recibir el Premio Nóbel de Paz 2021. ©





Colectivo Sumak Kawsay: semillas que florecen en el concreto

9

Mientras no puedan extinguir la memoria ancestral de Abya Yala y el caminar del Sumak Kawsay, seguirá la siembra con semillas de resistencia, dignidad, colectividad, memoria, sentipensamiento, armonía, diversidad, y seguirá floreciendo el Ayllu, el equilibrio natural de la vida y la memoria de los pueblos originarios

Por Jhon Mario Marín Dávila

Con la creación de la huerta Sumak Kawsay en la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín, empiezan a hilvanarse procesos organizativos y un tejido que va cualificando y profundizando la idea de tener un Colectivo que tuviera varias aristas de trabajo. En abril del 2016 surge el Colectivo Sumak Kawsay a través de la articulación de diferentes estudiantes de la Universidad Autónoma Latinoamericana, estudiantes de la Universidad de Antioquia, artistas, docentes y sectores del movimiento social, generando un espacio y una red de trabajo con el propósito de transformar algunas problemáticas del territorio que habitan.

Esteban Garcés, integrante del Colectivo, afirma que el Sumak Kawsay “es un vocablo de la lengua quechua, Sumak es lo ideal, lo bueno, la realización, causa, causal y es la vida. Sumak Kawsay es el buen vivir, la vida buena, la vida en plenitud, una forma de vida en equilibrio y en armonía con la Madre Tierra, con la naturaleza y con todos los seres que la habitan, incluyendo animales, humanos, minerales, plantas y todas las formas de existencia que puedan habitar en este mundo, incluso las formas microscópicas. Sumak Kawsay es una cosmovisión que se hereda de los pueblos ancestrales de América Latina, es una cosmogonía de la vida misma, de la existencia misma”.

En consecuencia, el territorio es muy importante para el Colectivo. Según Esteban Garcés, “a diferencia de la noción feudal y capitalista de la tierra, que hace referencia simplemente a un espacio geográfico para su explotación o para su permanencia, para nosotros el territorio es precisamente la suma de un espacio geográfico más una cultura que habita, entonces en ese diálogo entre espacio geográfico, cultura, memoria, acción, pensamiento, se construye una relación. En el territorio habita la memoria, las identidades, las prácticas, todo lo que compone el seno también de una cultura y de un pueblo; hay una relación entre la forma de vida de una comunidad y el espacio geográfico que habita, hay una conversación permanente”.

El accionar del Colectivo Sumak Kawsay busca fomentar, impulsar, generar y tejer el buen vivir en el Valle de Aburrá y en muchos otros territorios donde puedan aportar; algunas de sus acciones son: la investigación social académica y los procesos educativos como algunas experiencias académicas desde la sistematización, recuperación de saberes ancestrales, el policultivo o la agricultura orgánica urbana y rural, el arte y la música como herramienta de transformación. Han impulsado procesos educativos como: el Círculo de Pensamiento de Abya Yala y la Escuela Popular de Sikuris, también se han sumado a las marchas y organizaciones sociales y se mueven en periferias, universidades y teatros, espacios de encuentro para el pensamiento y construcciones filosóficas de las epistemes del continente. Por eso se consideran a sí mismos como gestores en la

generación de espacios de ciudad como el Inti Raymi, el cual han apoyado en los últimos 3 años y otros espacios artísticos y encuentros que apoyan desde la música.

La siembra ha sido la esencia que ha movilizado las subjetividades de los integrantes. Esteban Garcés manifiesta que “en estos valles Aburráes, Tahamíes, Niquías, Bitagüíes somos el legado milenario de estos pueblos agrícolas que vivían en armonía con la tierra. Para nosotros sembrar es volver a las raíces, volver a la memoria, a la identidad, recuperar prácticas que nos devuelvan la tranquilidad y la fuerza. Sembrar también representa una acción colectiva de organización, distribución del trabajo, fortalecimiento de la conectividad, y el policultivo que representa la siembra en diversidad, la divergencia y la complementariedad dentro de la familia extensa”.

Este Colectivo se ha sostenido a partir de la autogestión, fuerza, articulación, voluntad, autonomía de cada una y uno de los integrantes, puesto que el espacio no cuenta con ningún tipo de financiamiento público o privado. Sin embargo, para potenciar sus proyectos han participado en diferentes convocatorias y han sido seleccionados en: la agenda cultural de Medellín, la fundación mi sangre y el museo de Antioquia. Pero buscar incentivos económicos, fuentes de financiamiento o un reconocimiento institucional no es la finalidad primordial del Colectivo; por el contrario, su pilar es la autogestión, la autonomía de mantenerse desde la fuerza de los individuos y desde la cohesión de la colectividad: esto es lo principal que ha hecho que florezca y siga floreciendo el Colectivo.

Entre los obstáculos que han tenido que enfrentar se destaca no tener un territorio o un lugar fijo donde se puedan desenvolver las actividades. Por esto se han apropiado, dando uso colectivo y comunitario, de un espacio de la Universidad Autónoma Latinoamericana, donde tienen la huerta y generan un espacio

popular dentro de una institución privada; sin embargo, tienen una gran dificultad con este espacio, ya que dicha universidad les pidió que entregaran la cancha donde tienen la huerta, desconociendo los casi cinco años de resistencia, acción colectiva y de trabajo comunitario.

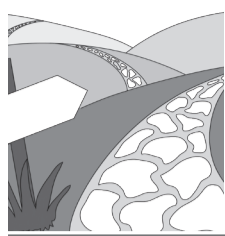
Sin comprender que en este espacio lograron generar un escenario de intercambio de saberes, de encuentro intercultural con pueblos indígenas, afrodescendientes, mestizos, académicos, gente de la ciudad y artistas, espacios de encuentro para el pensamiento y acción colectiva, el reverdecimiento de los espacios a través de la agricultura y el florecimiento de la vida a través de la siembra y el cuidado de las plantas.

Esteban Garcés argumenta que “la universidad tiene la desfachatez de pedirnos el espacio para hacer una placa deportiva, nos quieren sacar de la universidad precisamente porque el pensamiento diverso genera piquiña, el pensamiento diverso incomoda, molesta, disgusta. Pensar diferente en Medellín, en el Valle de Aburrá y Antioquia es casi ponerse como tiro al blanco. Pero hasta ahora hemos sabido resistir desde la acción colectiva, hemos sabido resistir desde esa noción de reciprocidad y familia extensa, desde conceptos tan bonitos como la Minga que es el trabajo colectivo, el trueque que es también un intercambio, las formas organizativas de base que nos han permitido mantenernos unidos y la palabra como instrumento principal de tejer los corazones ha sido un factor fundamental”.

El Colectivo Sumak Kawsay, a pesar de los obstáculos, sigue sembrando vida, cuidando sus cosechas naturales y sociales, floreciendo, recogiendo sus frutos para fortalecerse y compartirlos, tejiendo la palabra, honrando y dándole vida a la memoria ancestral, hilvanando colectivamente, resistiendo a las colonizaciones y al capitalismo y, sobre todo, demostrando que hay otros modos de vidas distintas. EC



Fotos: Cortesía Colectivo Sumak Kawsay



Desplazados y otra vez desplazados

Por Betty Ciro

10

Casi tres meses cumplen 35 familias habitando debajo del puente de Guasimalito en el municipio de Bello, Antioquia. En un área de dos metros cuadrados se acomodan familias hasta de cuatro personas. Unos espacios como multiplicados para que pueda ubicarse el camarote, la cocina, una repisa con los zapatos, la ropa, perfectamente encerrada. Las paredes y el techo son de plástico y, como puede inferirse, la privacidad entre familias y más aún en la misma familia es algo imposible. Los servicios más elementales en pleno siglo XXI como son el agua, la energía eléctrica y los servicios sanitarios también están ausentes para estos colombianos.

Estas familias no están allí de vivas, buscando hacerse a una casa, como dirían algunos que lanzan acusaciones sin conocer las razones que los han llevado a enfrentar semejantes condiciones tan degradantes; a lo mejor, nunca les ha tocado enfrentar el desplazamiento como a estas personas.

Todos los refugiados bajo este puente, localizado unos metros antes del Cementerio Jardines de la Fe, son desplazados del Bajo Cauca, el Sur de Córdoba, el Sur de Bolívar, algunos también del Chocó y de Urabá, pero no han sido desplazados una sola vez; algunas de esas familias, como la de Ramiro, ya completan tres desplazamientos desde que en 2012 tuvieron que huir de Tarazá para salvar sus vidas. En aquella ocasión Ramiro fue herido de gravedad, pero afortunadamente fue intervenido quirúrgicamente y logró salvarse para alcanzar a su esposa e hijos que ya habían llegado hasta Santa Rosa de Osos. Pero, como las víctimas del conflicto armado en Colombia son un estorbo para las distintas administraciones, de allí fueron empacados con otras dos familias en una volqueta y descargados en Los Altos de Niquía en Bello.

Con ayuda de familiares se ubicaron en dos piezas que pagaban con el fruto de lo que lograban trabajar: Ramiro en la construcción y Suly, su esposa, en casas de familia o a veces en plantas de confección; y todo ello a pesar de ser reconocidos como desplazados ante la Unidad de Víctimas, toda vez que realizaron los trámites exigidos: declaración, acopio de documentos, constancias de prensa, de la Fiscalía, de la Policía que certificaban la existencia de los grupos armados en los territorios de los cuales fueron desplazados. Como si no fueran suficientes las escalofriantes cifras publicadas por ACNUR de desplazados en Colombia, que en 2019 ocupó por cuarto año consecutivo el primer lugar en el mundo en víctimas de desplazamiento forzado dentro del mismo país y que, en general, en desplazamiento interno y externo, continúa ocupando el deshonroso segundo lugar, después de Siria.

Tampoco es necesario mucho esfuerzo para explicarse por qué tantos desplazados del Bajo Cauca, una región que se disputan todos los grupos ilegales en función de controlar el negocio de la coca. Según las cifras, el Bajo Cauca aporta el 70% de los desplazamientos masivos del departamento.



Foto: Alvaro Lopera

Llegó la pandemia

La llegada de la pandemia golpeó inclementemente a los más azotados por el sistema y, por supuesto, los desplazados están en el eslabón más bajo. Los pocos jefes de familia que lograban rebuscar un empleo intermitente fueron los primeros que “volaron” al llegar la pandemia. Enfrentados a la presión de los arrendadores, que también sobreviven de milagro, a la falta de comida, y a todas las demás necesidades de una familia, decidieron, con otras personas en su misma condición, desplazarse hasta un terreno vecino a la empresa Conasfaltos para construir unos ranchos y sobrevivir con sus familias.

En casi un mes lograron construirlos, independientes unos de otros; el agua se las aportaba un vecino solidario por medio de una manguera, a diferencia de la dueña de la bomba distribuidora de gasolina, que se ubica al lado de la autopista cerca de los asentamientos, quien no descansaba ni un día de ir a la Policía, a la Alcaldía y a cuanta entidad gubernamental existiera a solicitar que desalojaran a aquellos colombianos de su vecindad.

Pero la presión no solo venía de la doña de la bomba, tampoco el otro poderoso vecino, Conasfaltos, ha parado de exigir a la administración municipal de Bello y a su socio, el alcalde de esta municipalidad, que expulse a estos desplazados, para que no husmeen en sus alrededores.

El 5 de agosto desembarcaron las tropas

Ese miércoles, a plena luz del día, con motosierras al hombro, llegaron las entidades del Estado: Policía, Esmad, Personería, Policía de infancia y adolescencia y procedieron a expulsarlos de los ranchos y a “voliar” motosierra a sus soportes: hoy se pueden apreciar, en algunos de los troncos que permanecen en pie, los cortes perfectos de estos aparatos, tristemente célebres en la historia de Colombia.

Este procedimiento no reparó en niños ni en ancianos ni en discapacitados ni en enfermos, todos por igual fueron empujados y quien se

atrevió a filmar el atropello tuvo que amanecer en los calabozos de la Fiscalía, como le ocurrió a Juan y sus hijos. Aunque, seguramente ninguno de los afectados por este operativo conoce la Ley de Infancia y Adolescencia, sí han escuchado que en Colombia los derechos de los niños prevalecen y que por eso mismo existe un sector de la Policía dedicada al cuidado, por así decirlo, de este sector de la población; sin embargo, allí sucedió todo lo contrario, antes que proteger atacaron a los niños.

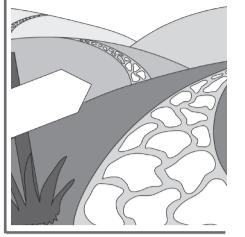
La administración de Bello olvidó la existencia de la pandemia y obligó a estos desplazados a enfrentar unas condiciones peores que las que estaban padeciendo en sus ranchos.

Continúa la presión

El inspector primero de Policía de Bello, Juan Sebastián Montoya, fue quien recibió la orden de efectuar el operativo de desalojo del 5 de agosto; pero él, consciente de la obligación del Estado de proteger a los niños, a los ancianos y de garantizar el disfrute de los más elementales derechos, se negó a hacerlo mientras no se les brindara a estos compatriotas un lugar digno para vivir, con acceso a los servicios públicos y donde pudieran disfrutar de la salud y la educación como obligaciones del Estado.

Sostiene el funcionario público que se debe respetar el principio de Confianza Legítima que consiste en la prohibición en cabeza del Estado de alterar de manera súbita sus relaciones con los particulares, sin que se les otorgue un periodo de transición. Por esta razón, continúa negándose a la orden de desalojar a los desplazados del puente de Guasimalito mientras el Estado no les ofrezca una solución digna.

Mientras tanto, Conasfaltos continúa presionando para el desalojo y la Administración Municipal piensa llamar al Inspector que estuvo a cargo del anterior desalojo, un inspector de espacio público, para que le ejecute la orden que el doctor Montoya se niega a cumplir mientras no se les brinde a las familias una solución digna e integral. *EC*



El gobierno Duque pretende profundizar el modelo de negocio para la salud

Por Juan D. Suárez Gómez

El pasado 25 de octubre de 2020 fuimos testigos de un triunfo histórico en Chile, donde el referendo por el cambio de la constitución de Pinochet que introdujo por primera vez en el mundo el llamado neoliberalismo, aquel modelo socio-económico que convierte los derechos básicos como la salud en un nicho de negocio para el mundo financiero, obtuvo casi un 80% de apoyo por parte de la población. Este triunfo tiene un efecto directo en Colombia, ya que nuestro actual modelo de seguridad social fue parcialmente copiado del modelo de aseguramiento privado en Chile, legado de la dictadura de Pinochet. Este debate es aún más actual por la reforma a la salud que cursa en el Congreso y que es impulsada por el gobierno, el llamado proyecto de ley 010 de 2020, que refuerza aún más el modelo de negocio a la salud que recientemente fue masivamente rechazado en Chile.

El proyecto de ley 010 de 2020 de reforma al sistema de salud, en palabras de la doctora Carolina Corcho, médica psiquiatra y vicepresidente de la Federación Médica Colombiana, "es un refrito de otras leyes pero su finalidad es política, no cambia absolutamente nada pero le da al gobierno nacional una excusa para mostrar resultados". El problema de este falso logro del gobierno es que se hace a expensas de la salud de los colombianos, profundizando un modelo donde las entidades promotoras de salud (EPS) continuarán controlando los dineros de la salud y dejando de lado cualquier consideración médica en favor del negocio. Este proyecto crea, incluso, una nueva cuota moderadora si las personas no cuidan su salud. Quiere decir que, si las personas se enferman, la EPS tendrá derecho a cobrar una cuota extra si juzga que el usuario no se "autocuidó".

Para todos los ciudadanos que debemos acudir al sistema de salud, hay una premisa clara: el problema del sistema de salud es que no garantiza este derecho fundamental. Según informe de la Federación Médica Colombiana,

en los juzgados se han puesto más de 3.5 millones de tutelas desde el inicio de la ley 100 en 1993. Se calcula que para el año 2019 los ciudadanos pusieron aproximadamente 210.000 tutelas que exigían tratamientos básicos. Estos datos deben entenderse a la luz de una realidad global mucho más grave, ya que, según el Instituto Nacional de Salud, entre el año 1998 y el 2010 se presentaron aproximadamente 1.200.000 muertes evitables en el país. Todo lo anterior en un contexto donde el déficit del sistema de salud es aproximadamente de \$15 billones.

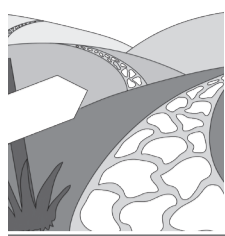
Cuando nació la ley 100, se obligó a las cajas de compensación familiar y el sector cooperativo a formar EPS, mientras le entregaban las pensiones de los colombianos a los grandes emporios financieros. Luego de generar el esquema de fondos privados, empresas financieras como Suramericana de Seguros entraron de lleno en el sector salud convirtiéndose en aseguradores (EPS), que junto con los prestadores de servicios de salud (las que llamamos instituciones promotoras de salud - IPS) se convirtieron en el puntal de un repetido negocio que está mediado por la prestación del "servicio" de salud. La EPS es la que está capacitada legalmente para captar los recursos públicos, mientras la IPS es la que directamente presta el servicio; la EPS se enriquece por la simple intermediación. Así, el sistema de salud funciona como un juego macabro donde dos actores que deberían controlarse entre sí se convierten en aliados para extraer los recursos del Estado. El negocio redondo consiste en controlar tanto al asegurador como al prestador, en un sistema imposible de regular porque, como vuelve a decir la doctora Corcho, "se ha constituido una puerta giratoria entre los directivos de las EPS y el Ministerio de salud, algo que también incluye a la entidad que vigila, la Superintendencia de Salud".

La creación de las EPS bajo la ley 100 no implicó que los empresarios de la salud invirtieran un peso, sino que los dineros públicos se convirtieron en el capital que ellos aprovecharon para funcionar con base en el pago que debe hacer el Estado por cada usuario. Actualmente se calcula que el sistema maneja un total de 40 billones de pesos, los cuales se convierten en liquidez para el sistema financiero basada en la negación de servicios y del derecho a la salud. En cierta medida podríamos hablar de la existencia de un sistema extractivo, donde los dineros de la salud se convierten en la fuente de riqueza de un sistema rentístico que busca, para ello, cooptar las instancias de decisión sobre la salud y la vida del pueblo colombiano.

Uno de los ejemplos de estas fallas del sistema es Savia Salud, una EPS que nació de una alianza entre la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia y Comfama, y que pretendía subsanar las contradicciones del sistema de salud regido por la ley 100; pero finalmente ante la dura competencia del capital privado fue un experimento fracasado, incluso después de los sucesivos rescates financieros de que ha sido objeto en los últimos años. Como afirma la doctora Corcho, "ejemplos como el de Savia Salud hacen evidente que el problema de la salud en Colombia no es de voluntarismo, sino que es un modelo fracasado que concentra los recursos y evita garantizar el derecho a la salud a los más vulnerables". Savia Salud se convirtió en una EPS inviable, una de las principales entidades negadoras del derecho a la salud, así como han ido cayendo una a una otras EPS como Saludcoop, Cafesalud y Medimás.

El proyecto de ley 010 que actualmente cursa en el congreso tiene una intención de mostrar al gobierno como un reformador del sistema de salud; sin embargo, si se miran los cambios que trae este proyecto se puede llegar a la conclusión de que profundiza el modelo actual donde las EPS terminan siendo parte del sistema financiero y el derecho a la salud seguirá vulnerado. Como dice la doctora Corcho, "el 95% de los colombianos tienen carné de la EPS, pero estar afiliado no implica tener una atención digna". Las agremiaciones médicas han venido dando la pelea, pero es necesario que esta movilización se convierta en una bandera masiva por un sistema de salud digno, que deje a los negociantes y especuladores de lado. Ya Chile nos ha mostrado una alternativa. EC





La renovación urbana de Medellín o el tsunami de víctimas del “desarrollo”

12

Por Álvaro Lopera

Planear con pinzas desde la comodidad de un escritorio cómo será el Medellín del futuro impide ver el desastre social que se ocasionará al desplazar a innumerables familias por motivos del “desarrollo”, como eufemísticamente llaman a las obras públicas. Muertes, enfermedades, trastornos sicosociales, depresión, empobrecimiento y múltiples problemas sacados del sombrero de mago de la visión neoliberal del ordenamiento urbano, son los resultados de una planificación inhumana y profundamente capitalista, en donde el hombre y su hábitat son lo menos importante. Solo importa la inversión y la acumulación de riqueza que se desprende de la desposesión de la vivienda urbana tras la ruptura de ese tejido social comunitario elaborado con la paciencia, la sapiencia y el acumulado colectivo de muchos años.

Barrio La Paralela

“El 1 de agosto de 2019 llegaron muchos policías a la casa de mi madre, no propiamente tocando la puerta sino derrumbándola. Nos habían avisado solo tres días antes para que saliéramos. Sacaron a mi madre, de 99 años, en una camilla y se la llevaron para el albergue que tiene el Municipio en el barrio Prado Centro. A mí me separaron y no me dejaron entrar a la casa. Todos los corotos los echaron en una volqueta. Lo que no se robaron, lo dañaron: la licuadora y la plancha las volvieron añicos. Una platica y una mercancía se me perdió, y mi mamá, a los dos meses, se murió”, contaba con voz quebrada Julio Mazo Pino, habitante del barrio La Paralela.

Llegaron como a todas partes con la parafernalia de los jóvenes profesionales que intentan hipnotizar con su verbo a las distintas audiencias: psicólogos, sociólogos, trabajadores sociales, todos egresados o estudiantes de universidades públicas. “Habrá acompañamientos hasta el final”, “ustedes se trasladarán por acá mismo y quedarán en mejores condiciones y si no se puede por acá, de todas maneras, quedarán bien”. Estos son los estribillos con que han llegado a todas y cada una de las viviendas que en el futuro serán demolidas para dar paso a la ciudad de las inversiones, del emprendimiento y la innovación.

“Desde el primer momento le dije al ISVIMED (Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín): no quiero plata, dennos una vivienda por acá mismo”. “Claro señor, de eso se trata”. Al final, la expropiación violenta se la hicieron a él y a un hijo que vivía en el segundo piso y al cual todavía le están pagando el arriendo en la casa que le prometieron que iba a ser suya. Su familia es originaria de Caucasia; recorrió medio Medellín hace demasiados años buscando asentarse en alguna parte hasta que llegó a La Paralela. Su padre, que era oficial de profesión, hizo la casa con ayuda de Julio, su único hijo.

–Pero esta casa no vale nada– le dijo Luis Pérez al padre de Julio cuando era alcalde y ya se iniciaba el acoso para que salieran los habitantes de ese sector aledaño a la estación Acevedo del Metro.

–Para usted no, pero para mí es un palacio. Acá tengo a mi gente resguardada del frío, de la lluvia y acá los alimento– le contestó el viejo con gran pundonor y dignidad.

Fue un acoso permanente hasta que en 2016 cayeron como aves de mal agüero. Un funcionario tras otro le decían que se largara, que buscara otra oportunidad. Julio sabía que no la tenía porque el dinero que le ofrecían no era suficiente para comprar otra propiedad por ahí mismo. Al final sigue de palero, “con menos trabajo por esta maldita pandemia”, sin casa, y

sin perspectivas de que logre algo bueno para él; a lo que se agrega la muerte de su madre tras haber soportado esa vida oscura en el albergue en donde las palabrotas y la mala atención eran lo más visible para ella, una mujer que había perdido la locomoción y el habla años atrás.

“Para colmo de males solo pagaron, desde agosto de 2019, tres meses de arriendo. Ahora sale todo de mi bolsillo. Los tengo demandados y en la demanda está hasta la muerte de mi madre”.

– ¿Cuándo pagarán?

–No se sabe, pero con ese dinero espero adquirir una vivienda social con un subsidio del Estado.

Lo cierto es que tendrá que pagar una cuota mensual, algo nuevo para él, en el marco del trabajo precario del que vive porque, a sus 64 años, no tiene pensión.

Barrio Doce de Octubre

“Nos cayó el Metro inesperadamente. Perdí una familia de 45 años, que son todos mis vecinos; perdí mi trabajo independiente que tenía con 4 o 5 clientes, a quienes les vendía bolsos. Vivía en el Doce de Octubre desde 1973”. A finales de 2015 le avisaron que necesitaban su propiedad. Benhur Molina, de 57 años, definitivamente no se encuentra a gusto en su nuevo apartamento, pues no tiene amigos, perdió toda ligazón con sus viejos parceros y sufre de tropiezos graves en su economía.

“Primero llegó personal del Metro y con mucha amabilidad nos habló de la importancia de la obra y de que ese gran proyecto iba a beneficiar a toda la comunidad. Después hizo un censo y encontraron cerca de 30 propiedades casi todas de tres pisos. Seis meses después llegaría el ISVIMED y muchos profesionales – psicólogos, abogados, sociólogos– y empezaron a hablarnos de cosas buenas, de que entendían la necesidad de quedarnos por acá, de que íbamos a quedar mucho mejor de lo que estábamos, que contaríamos con acompañamientos psicológicos, los mismos que no le cumplieron ni a los más vulnerables; supe de la muerte de tres personas de la tercera edad y varias enfermas, después de todo ello”. Al final, como en todas las negociaciones en Medellín, la dulce voz de los funcionarios sería cambiada por la burda orden del Municipio: “No se pueden demorar porque los expropiarán y ahí sí peor para todos porque les quedaría un pleito judicial”. Y claro, aparecía en el horizonte aquello que siempre nos han “aclarado” en este país: “es tontería pelear con el Estado”.

Vivía en un edificio de tres pisos de 212 metros cuadrados de área construida. Era una sucesión de la cual la mamá era propietaria del 50% y el resto pertenecía a 8 hermanos. La Lonja, entidad aliada del municipio para evaluar las casas afectadas, informó –un año y medio después– que por ese edificio pagarían solo \$379 millones; esta propuesta era muy inferior a lo que inicialmente habían calculado los funcionarios de la Universidad Nacional que los

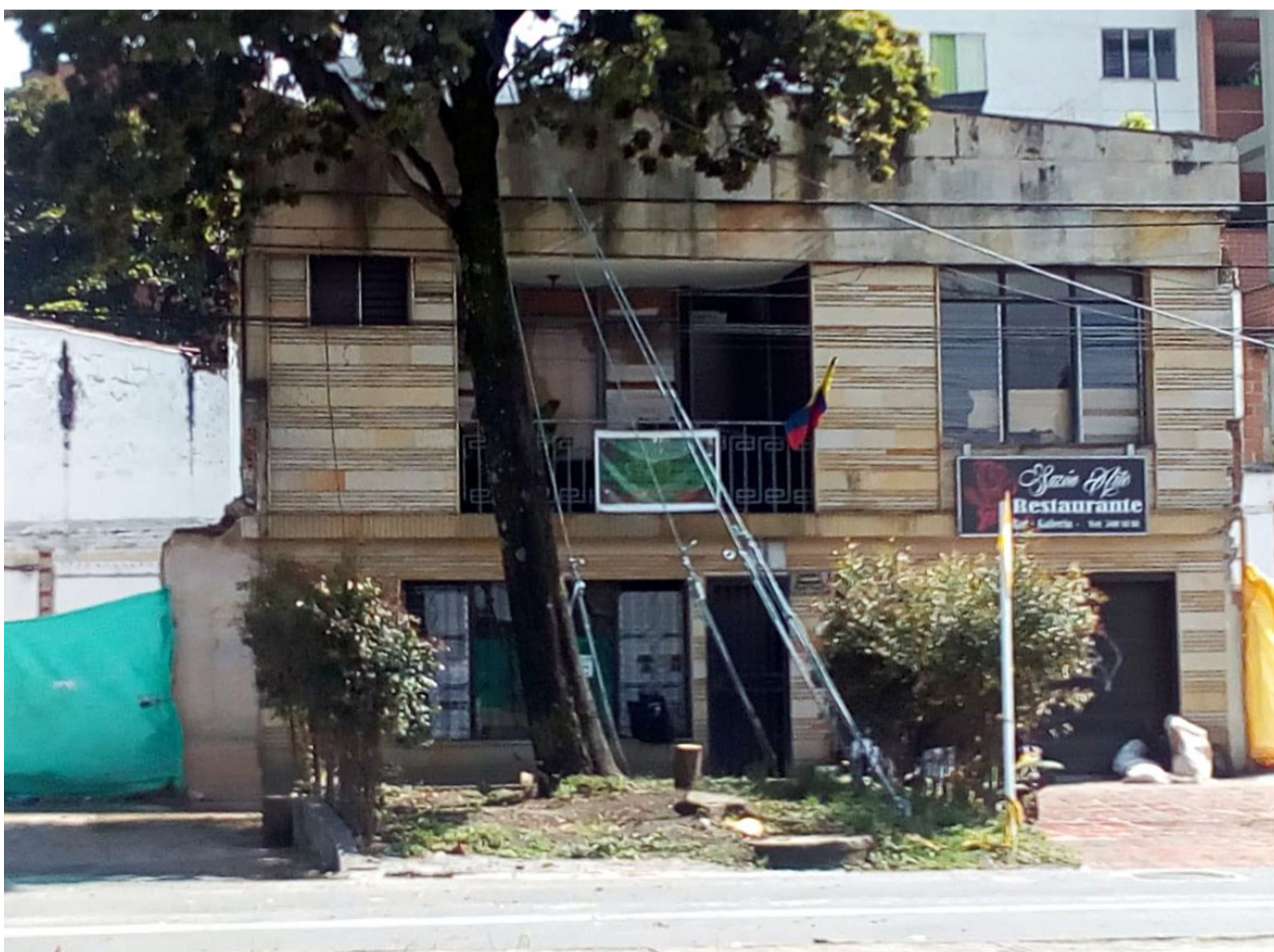
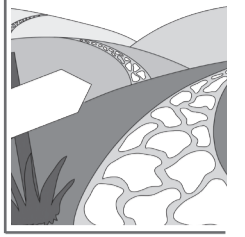


Foto de la casa de Julia: Julia Pertuz



Resistencia contra el Metro en San Luis. Foto: Miguel Ángel Chalarca

acompañaron casi dos años. Y siempre, como espada de Damocles, les hablaron de que había un presupuesto del cual no se podían pasar. Evacuaría la propiedad en septiembre de 2018.

“¿Me pregunta que si presentamos resistencia? Claro que sí. Muchos nos unimos y empezamos a pelear para que la obra del Metro no se construyera allí, pues había un lote cercano donde podría hacerse. ¿Pero sabe qué pasó? El político Fabio Rivera apareció con trabajadores suyos que vivían por ahí y casa por casa visitó a los propietarios, y nos dividió. Ni la Junta Administrativa Local ni la Acción Comunal hicieron nada por nosotros. Solo quedamos cinco personas resistiendo. Al final los que habían resuelto el problema no se preocuparon por los otros”. Posteriormente, cada grupo familiar haría la negociación con el ISVIMED y a cada uno le dijeron que no informara lo que habían negociado “para evitar suspicacias, envidias y problemas de seguridad”.

“Todo parecía planeado para que nunca nos reuniéramos los afectados: firmábamos el acuerdo de compra en un sitio; cuando volvíamos a firmar otra cosa era en otra institución y así hasta el final. Todo para mantenernos desconcentrados y aislados”.

A mediados de 2017 el ISVIMED informó cuánto iba a pagar. Al principio solo entregaron el 20% para pagar impuestos, desconectar servicios y dejar la propiedad limpia. El Municipio tiene la obligación, después de todo ello, de sacar la propiedad de Catastro, pero resulta que hasta en esto incumplieron, pues muchos aún pagan el impuesto sin tener la propiedad, como aún sucede en La Paralela.

Le entregaron \$18 millones en 2019, los que sumaron a \$36 millones de subsidio para comprar un nuevo apartamento en Pedregal –un barrio distante de su vivienda– pignorado por el Municipio por 10 años, que lo dejaría con una deuda de \$45 millones. De todo el daño causado solo le queda en su haber una demanda de daños y perjuicios contra el Municipio, por afectación de unidad productiva en el hogar.

La 80: el Metro que arrasa con sueños

El Metro de la 80 iniciaría funciones en 2025, afectando directamente en el cruce de la calle Colombia a 117 predios y en el cruce de la calle San Juan a 128 predios, de acuerdo con información del portal Kavilando.

A lo largo de los más de 13 kilómetros que tendrá el Metro, se afectará a más de diez mil

negocios. La obra empezó en firme en la calle Colombia en noviembre de 2019 y en San Juan en el mes de octubre de 2020.

Julia Pertuz, de 54 años, esposa del propietario, residente en la calle Colombia y afectada por la obra, afirma que para los 245 predios tienen establecido un presupuesto de \$94.000 millones, cortapisa que sirve, como en todas partes donde se negocian las propiedades, para evitar transacciones individuales con esperanzas de precios justos.

A pesar de que la EDU (Empresa de Desarrollo Urbano) asegura estar optimista por el porcentaje de aceptación en compra de inmuebles que tiene el proyecto, Julia tiene una percepción muy distinta respecto de la justicia de la negociación.

“Vivimos en una casa de tres pisos desde hace muchos años –de 378 metros cuadrados de área construida– en la calle 50 con la 78A. En el primer piso tenía un restaurante, en el segundo vivimos con un hijo y le alquilamos a una cuñada, y en el tercero mi esposo tenía un taller de metalmecánica. Hasta 2018 nos aseguraron que no íbamos a ser afectados y en enero de 2019, contradiciendo lo anterior, fuimos notificados de la obra. Somos los últimos informados y somos los primeros que vamos a salir. Por lucro cesante solo nos reconocerán 6 meses”.

En vista de que no iban a ser afectados, su esposo cambió el alcantarillado, haciendo



Foto del Metro-Doce de Octubre: Benhur Molina

un gasto total de \$20 millones en tanto iban a ampliar el restaurante, dinero que se perdió porque cuando avalúan hablan de la vejez de la propiedad más que de las mejoras que se le hacen a ella.

“Al principio hicimos resistencia, plantones, protestas, pero al final todo se despelotó. Nosotros vamos a salir, pues además de lo anterior la presión psicológica es aterradora: quitan la energía cada rato, hay ruido las 24 horas por la demolición de otras casas, atracos, excrementos en la puerta de la casa, todo un acoso. Nos pagaron el metro cuadrado muy barato, mucho menos de \$3 millones. No podemos comprar una casa igual por el sector, pues son muy costosas. Ahora arrendamos un apartamento y desde allí seguí con mi restaurante, pero a domicilio”.

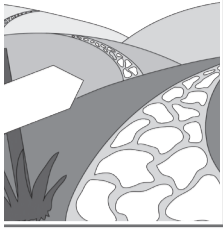
La funcionaria que les enviaron nada hizo desde lo social, solo habló desde el principio de papeles para firmar y, al final, después de dimes y diretes, sacó el As bajo la manga: la palabra expropiación y el panorama del pleito con la Administración. Su casa de tres pisos, al final, se transformará en zona verde.

Gentrificación disfrazada de urbanismo

El panorama mostrado anteriormente es reiterativo en todas las obras: el tranvía de Ayacucho generó desplazamiento y daño en innumerables propiedades de barrios cercanos a la obra: San Luis y Miraflores y la quiebra de numerosos negocios de las familias que habían vivido tradicionalmente allí. En el haber de la gentrificación, 4 barrios están oficialmente en la mira para empujar firmemente el proyecto *Distrito de Innovación de Medellín*: Sevilla, Jesús Nazareno, El Chagualo, San Pedro (parte baja) y la lideresa social María Elena Pino, afirma que también está en la mira Moravia, como barrio de entrada al centro histórico de la ciudad.

La gentrificación se define como un proceso de transformación urbana que implica la revalorización de un barrio históricamente excluido o pauperizado u otros territorios de similares características que van adquiriendo importancia, con el fin de cambiar su perfil y atraer a pobladores de alto poder adquisitivo, provocando la expulsión o desplazamiento de sus históricos habitantes (por encarecimiento de viviendas, servicios públicos, alimentos, aparición de bandas delincuenciales, expendedores de vicio, atracos, etc.). Estos emprendimientos especulativos son impulsados por corporaciones empresariales o transnacionales y proyectos inmobiliarios que compran propiedades a bajos precios, invierten en infraestructura y provocan una progresiva mejora urbana en beneficio de una élite.

Pues bien, esto último se asimila a lo que el municipio de Medellín, con todos los alcaldes a bordo, pretende hacer con estos cinco barrios populares de estratos 2, 3 y 4, los mismos que ascenderán a una escala superior si sus pobladores son desplazados de su hábitat. EC



14

Un Duque disfrazado de Leviatán

Por Santiago Alarcón Serna

Dentro de la ciencia política y en especial de la teoría del Estado, hemos entendido que este es quizás el momento de la historia en que el Estado parece más oculto, y, pese a su omnipotencia, no se deja ver, como ya bien apuntaba Bourdieu; de hecho, se ha vuelto mucho mayor la complejidad para pensarlo. El Leviatán, al decir de Monedero, se encuentra velado por un sinfín de disfraces, sin embargo, en Colombia parece que el presidente Iván Duque ha decidido usar todos los disfraces de la figura tomada de las historias bíblicas por Hobbes para explicar el Estado.

La democracia es competencia, una competencia que se da entre facciones políticas, pero que en el momento en el que una de estas facciones obtiene un poder tan aplastante que ya no es posible disputárselo, la democracia ha desaparecido. James Madison lo denominó “faccionalismo”, y en buena parte por esto fue creado el sistema de pesos y contra pesos como un diseño institucional complejo que garantiza la no concentración del poder en manos de una sola facción política.

Nuestra Constitución mantuvo la concepción de la competencia; basta con ver el artículo 113 de la misma al definir las ramas del poder público, dejando clara la tradición de la separación y control recíproco entre las ramas del poder público, buscando incluso disminuir el poder que posee el presidente de la República en su relación con los demás poderes del Estado. Sin embargo, el contexto de la pandemia ha profundizado un peligro institucional que ha estado latente en nuestra democracia, y ha sido el de la ruptura del equilibrio de poderes y el sistema de pesos y contra pesos gracias a la concentración de poder en el presidente.

Esta concentración ha sido lograda de a poco por parte del presidente y su partido político. Ya la organización “Transparencia por Colombia” advertía que esta concentración se daba en detrimento de las otras ramas del poder y de las libertades ciudadanas; y es que las otras ramas del poder público dejaron de ser plenamente autónomas, pues se ha logrado que quienes encabezan esas otras ramas sean personas muy cercanas al jefe de Estado, su partido y sus patrocinadores.

Tenemos por ejemplo al fiscal general de la Nación, el señor Francisco Barbosa, quien antes fue el consejero presidencial para los Derechos Humanos de Iván Duque. En ese cargo, más que defensa de derechos humanos hubo una férrea defensa del presidente ante cualquier cuestionamiento que se hiciera a su gobierno en materia de cumplimiento, respeto y protección de Derechos Humanos.

Además de la Fiscalía, tenemos el caso de la Defensoría del Pueblo. El nuevo defensor, Carlos Camargo, fue compañero en la universidad Sergio Arboleda del ahora presidente, y en realidad no es propiamente la persona más idónea para el cargo, dado que -y dejando de lado su cercanía al jefe de gobierno o sus problemas de cara al manejo de recursos en

otras entidades- Camargo nunca ha ejercido un cargo o labor que esté relacionada con la defensa de los Derechos Humanos, función primordial de la Defensoría del Pueblo.

Finalmente, los órganos de control, tanto disciplinario como fiscal, también hacen parte del abanico de cercanos de Iván Duque. En la Procuraduría está ahora Margarita Cabello y en la Contraloría Carlos Felipe Córdoba. Cabello renunció en su momento a su cargo como magistrada en la Corte Suprema de Justicia para ser la ministra de Justicia de Duque y posteriormente ser nombrada como procuradora; Carlos Felipe Córdoba, el contralor, ha hecho alianzas con Álvaro Uribe Vélez y mantiene una profunda cercanía con Duque y, además, con el fiscal Barbosa.

Adicionalmente, y como también lo manifestaba en su comunicado “Transparencia por Colombia”, una de las razones para que el poder del presidente de la República hubiese aumentado de forma preocupante ha sido la creciente cercanía del gobierno a las mayorías en el Congreso para garantizar el éxito de iniciativas legislativas y cambios constitucionales.

Esta cercanía se ha logrado no con un diálogo amplio o por su capacidad de generar consensos, como lo prometió en su campaña, sino acudiendo una vez más a la práctica que el presidente tanto criticó de su antecesor Juan Manuel Santos, esto es, la entrega de favores políticos, cargos y demás beneficios a cambio de votos favorables en ciertas iniciativas. Se

trata de la llamada mermelada, que ahora habrá cambiado de proveedor, pero la seguimos teniendo en el Capitolio auspiciada por el partido Centro Democrático.

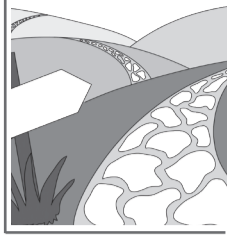
Con la presión de este partido se han propiciado escenarios como la negativa al regreso a las sesiones presenciales, a pesar de las consideraciones de la Corte Constitucional al respecto, o el freno de mano que le han puesto, con algunas dudas sobre la constitucionalidad y legalidad de sus acciones, a debates de control político como la moción de censura al ministro de la Defensa Nacional.

Finalmente, la pandemia ha permitido una intensificación de la discrecionalidad del poder del ejecutivo. El presidente, en pocos meses, expidió 115 decretos legislativos, y no todos, como lo demostró el control constitucional de la Corte, resultaban ser respuestas a la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid 19. Esta actividad legislativa sin precedentes, llevada a cabo por el presidente, vino aparejada de una serie de cuestionamientos al poder judicial y a los demás organismos que pudieran encargarse de generar un cierto control y no permitir que se satisfagan intereses particulares por medio de recursos públicos.

Ningún gobierno en la historia del país había contado con tal poder como el de Iván Duque: una mezcla entre la cercanía a órganos de control, un congreso que funge como notario de sus iniciativas y deseos y un estado de cosas dado por la pandemia, que favorecen su cada vez más notable autoritarismo, su indisposición al diálogo, y su sordera ante las necesidades ciudadanas. De esta manera se ha hecho más impositivo y camina por el sendero de un régimen cada vez más parecido a una dictadura que a una democracia. EC



Caricatura: José



El talante antipopular del régimen La Minga, el subpresidente y el Congreso de la Moda

Por Renán Vega Cantor

Al mismo tiempo que se desenvolvía la Minga indígena y popular se llevó a cabo el Décimo Congreso Latinoamericano de Moda. La primera reclamaba la presencia de Iván Duque, quien dice oficiar como presidente de este país. Pero se negó a darle la cara a los miles de indígenas y trabajadores que se congregaron en Bogotá desde el domingo 18 de octubre y se movilizaron por las calles de la ciudad capitalina el miércoles 21. El Congreso de Moda fue inaugurado en forma virtual desde el Palacio de Nariño por Iván Duque el lunes 19 de octubre. Estos dos hechos opuestos que se presentaron al unísono en este país indican el carácter antipopular del régimen del subpresidente Iván Duque y muestran la profunda grieta social que separa a las dos Colombias: la minoritaria de los ricos y poderosos, y la mayoritaria de los pobres y desvalidos.

La Minga se organizó desde el departamento del Cauca e inicialmente llegó a Cali, en donde unos diez mil indígenas estuvieron esperando en vano a Duque, quien nunca dio la cara, como clara muestra de lo que le interesan los problemas reales del país. Esa decisión irresponsable obligó a los mingueros a desplazarse hasta Bogotá. Desde el comienzo de la Minga entró en funcionamiento la propaganda mediática de los uribistas y sus áulicos que, con un profundo racismo y desprecio por los indígenas, dijeron que era una protesta injustificada, organizada por el “terrorismo” y el preludio del caos y la destrucción que iba a sufrir Bogotá.

Ganaderos, terratenientes, grandes comerciantes, el notablato de los gremios de empresarios y sus voceros periodísticos se encargaron de difundir mentiras y calumnias contra la Minga. El ganadero José Félix Lafaurie insinuó que no eran indígenas los que se movilizaban hacia Cali y Bogotá, porque usan botas y uniformes similares a los que emplean los guerrilleros. Otros voceros del Consejo Gremial replicaron un sinnúmero de disparates:

los indígenas son los verdaderos terratenientes de Colombia; a nombre de la diversidad gozan de unos privilegios y derechos que el resto de colombianos no tienen; con sus costumbres y sus idiomas son ajenos al resto de colombianos; y, entre las peores sugerencias, que son narcoterroristas y con el dinero que atesoran por las actividades ilegales financian un costoso viaje a Bogotá.

En este último sentido, la referencia más miserable la hizo el régimen de Duque y las fuerzas militares al presentar en público un dudoso hecho, como fue la supuesta incautación en el Cauca de un moderno laboratorio para el procesamiento de cocaína, dentro de los territorios indígenas, en el mismo instante que la Minga se encontraba en Bogotá. De ahí la propaganda de los uribistas dedujo que el regreso al Cauca de los mingueros se producía para ir a defender los laboratorios y mirar qué les había quedado, luego del patriótico montaje del Ejército.

Se insinuaba que la protesta era política, como si estuvieran haciendo un gran descubrimiento, porque la Minga vino a denunciar sus muertos y a pedirle explicaciones al régimen sobre las razones por las cuales matan a indígenas, excombatientes y otros colombianos pobres a lo largo y ancho del país. Como si la defensa de la vida y los territorios no fuera un asunto político.

En resumen, los indígenas son la expresión de la Colombia profunda, siempre en el abandono por el Estado y las clases dominantes, que se convierten en noticia pasajera cuando se registra alguna masacre, bombardeo de las Fuerzas Armadas o alguna violación por parte de los “héroes” de la patria (como sucedió con la niña Emberá en Risaralda), pero que siempre soportan miseria, hambre, desempleo y violencia.

Ese país, el de las mayorías de Colombia, no es el de Iván Duque ni el de las clases

dominantes. Su país es el de la simulación, el de los “colombianos de bien”, el de las pasarelas de la moda, con sus mentiras y engaños de pretendida belleza y vulgar exhibición mercantil de cuerpos y silicona. Tan grandioso certamen de la moda fue inaugurado por Duque, en forma virtual, desde el Palacio de Nariño, a escasas dos cuadras de donde se congregaba la Minga indígena y popular.

Con los indígenas, los estudiantes, los trabajadores, los campesinos, Duque nunca dialoga, porque, según afirma, para eso está el Parlamento. Pero con los mercachifles de los cuerpos, las cirugías plásticas y los trapos finos no solo dialoga, sino que convive con ellos, dizque porque encarnan las “industrias creativas” y “naranja” que exhiben sin pudor su banalidad en las pasarelas. La información oficial de la Presidencia presentó así ese “trascendental evento”: “El Presidente de la República, Iván Duque Márquez, participa este lunes 19 de octubre en la inauguración de la décima edición del Congreso Latinoamericano de Moda (IXEL) y el Encuentro de Industrias Creativas, cuyo tema central será ‘Hoy, un futuro no imaginado’”.

El lema es muy pertinente, porque los mercaderes de la moda hablan de un futuro radiante de negocios y ganancias, mientras que en la Minga no hay que imaginarse ningún futuro luminoso, porque el pasado y presente que han soportado está lleno de muerte y terror, generado por quienes están haciendo trizas cualquier atisbo de paz.

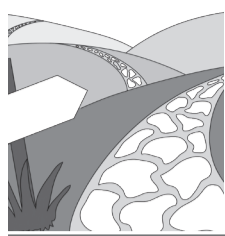
Duque, al negarse a hablar con la Minga, representa a las mil maravillas a esa Colombia excluyente, racista, clasista, sexista, que exalta la opresión y discriminación, como lo expresó una energúmena mujer que, en Bogotá, a grito herido les dijo a los indígenas: “no los queremos que se vayan para su tierra, que son ignorantes, brutos, tercos... porquerías”. De seguro, esa dama tan refinada adora a los maniqués de la moda, que son para Duque grandes emprendedores, colombianos de bien, que ahora pretenden ser los “creadores” de la cultura en este país.

Duque aseguró en su discurso de instalación del Congreso de Moda que “nuestro compromiso desde el Gobierno es poner la cultura en el centro del desarrollo”. Claro, la cultura de la muerte, del desprecio, del racismo, como se evidencia con el trato dado a la Minga.

Que Iván Duque concentre su atención en un Congreso de Moda y no hable con la Minga, aparte de rubricar su clasismo, denota su “profunda” idea de cultura, propia de su universal bagaje literario en el que sobresale *Blanca Nieves y los 7 enanitos*. Para personaje tan culto, que se mueve en el ámbito de la economía naranja y las “industrias creadoras” (como la de La Moda), los indígenas son unos patirrajados incultos, con los cuales no puede perderse un minuto. Mientras que los diseñadores de la moda, las modelos y cantantes como Maluma encarnan la cultura por excelencia y por eso con ellos sí se puede reunir durante horas para compartir sus grandes valores culturales, que no son otros si no los de la estupidez generalizada y la ignorancia criminal de la Colombia traqueta. *EC*



Foto: Radio 1040 a.m. Popayán La trocha



16

Nuevo atentado contra la Estabilidad Laboral Reforzada

Por Luis Alfonso Ibáñez- Everiel Loaiza

Como una consecuencia directa de la deshumanización y avaricia neoliberal, la salud, en todas sus dimensiones, se ha convertido en un negocio, dejando de ser un derecho y un servicio fundamental. De esta manera los empresarios, junto a los últimos gobiernos colombianos, han emprendido una ofensiva estratégica contra diversos derechos y conquistas de los trabajadores en esta materia, especialmente en lo que respecta a la protección a la salud en el trabajo.

En tal sentido, los trabajadores colombianos estamos frente a un escenario amenazado por una ola de reformas lesivas como los siguientes proyectos de ley: El 010 que se denomina Reforma a la Salud, y que tiene la finalidad de transformar las EPS en aseguradoras y ofrecer planes únicos de salud, retirar la responsabilidad de las EPS sobre el derecho a la salud y endilgársela a los pacientes; en este proyecto no se habla de enfermedad sino de siniestros como si la salud y la enfermedad fueran un producto sobre el que hay que pagar para acceder, lo cual agravará la crisis sanitaria al dejar la atención a la salud al vaivén de los mercados y las imposiciones de los grandes pulpos del sector. Se suma a éste el proyecto de ley 241 que pretende acabar con la figura de la Estabilidad Laboral Reforzada -ELR, lo que significaría despedir a miles de trabajadores que padecen diferentes patologías de origen laboral y común.

La ELR es una figura contemplada en el artículo 26 de la ley 361 de 1997, que protege a todos los trabajadores que presentan discapacidades o limitaciones físicas o mentales y que para un eventual despido se requiere autorización del Ministerio de Trabajo. No obstante, quienes sean despedidos injustamente o su contrato terminado por razón de su discapacidad, o se encuentren en debilidad manifiesta, tendrán derecho a una indemnización de ciento ochenta (180) días de salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones que se estipulan en el código sustantivo de trabajo.

Esta garantía se ha ido materializando por la jurisprudencia de los últimos años y por la vía de la tutela. Muchos trabajadores han logrado su reintegro laboral al ser despedidos injustamente. Pero el empresariado colombiano, a través de algunos senadores del Partido de la U y recientemente del Centro Democrático, pretenden por todos los medios la derogación y/o modificación del artículo 26 de la ley.

Ataques contra la ELR

El primer ataque ocurrió cuando Juan Manuel Santos sancionó el decreto 019 de 2012 en su artículo 137, el cual estipulaba que para despedir al trabajador con ELR que incurriera en una falta causal de despido no requeriría autorización por parte del Ministerio de Trabajo. La Corte Constitucional declaró inexecutable este artículo con la Sentencia C744/12.

El segundo se originó en el año 2015, siendo ministro de trabajo el ex dirigente sindical Luis Eduardo Garzón, quien presentó un proyecto de ley que se denominó Pipe 2.0 “Plan de impulso a la produc-

tividad y el empleo”. Dicho proyecto tenía como finalidad que el Ministerio de Trabajo presentara una reglamentación para poder legalizar y justificar el despido de un trabajador en condición de debilidad manifiesta y ELR, es decir, la intención era modificar lo estipulado en el artículo 26 de la ley 361 de 1997.

El tercero fue en el año 2016, cuando fue ministra de trabajo Clara López. Ésta presentó un decreto que se denominó de “Confidencialidad”, el cual buscaba adicionar en el capítulo VI del Decreto 1072 de 2015 (decreto único reglamentario) la modificación del artículo 26 en mención.

El cuarto ataque fue precisamente en el mismo período de 2016 por parte del senador del Partido de la “U” Eduardo Pulgar Daza, quien presentó el proyecto de ley 018, que se denominó “Pacto de Productividad”, y en su artículo 8 buscaba la derogación de la ELR.

El quinto se produjo en el año 2018, cuando el Consejo Gremial Nacional –que con su agenda empresarial 2018–2022 tuvo injerencia en el Plan Nacional de Desarrollo– en el artículo 118 de éste quiso introducir un mico que decía lo siguiente: “De no ser posible la reubicación laboral en la empresa donde trabaja, el Ministerio de Trabajo coordinará a nivel nacional una bolsa de empleo con el propósito de lograr la reincorporación a la vida laboral”.

El sexto se realizó en el año 2019, con la ex ministra de trabajo Alicia Arango, que expidió la circular 049 donde fijó los lineamientos institucionales a los inspectores de trabajo para autorizar o negar la terminación de la relación laboral de trabajadores que se encuentren en condición de discapacidad o debilidad manifiesta por razones de salud. El argumento de la ministra se basó en que había un abuso en el uso de las incapacidades médicas laborales.

El séptimo ataque se produjo el pasado 25 de agosto de este año, por intermedio del senador y empresario del Centro Democrático, Gabriel Velasco, quien presentó el proyecto de ley 241 y que tiene como finalidad modificar el artículo 26 de la ley 361 de 1997. El proyecto estipula que un trabajador que se encuentre en discapacidad, si presenta una pérdida de capacidad laboral debidamente calificada y superior al 25%, estará protegido con el fuero



Ilustración: Tomada de laborinvestigation.blogspot.com

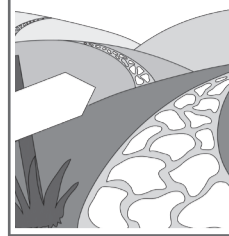
a la salud, o sea, que si un trabajador tiene una discapacidad y una calificación inferior al 25% será objetivo de un potencial despido; lo mismo para aquellos que no tengan una calificación o que estén en proceso. Se evidencia que dicho proyecto de ley va en contravía de la Constitución Política y los convenios internacionales de la OIT.

Este último proyecto de ley se aparta de los lineamientos de la Corte Constitucional, que en la Sentencia SU049 /1 dice que no importa que el trabajador tenga una calificación para estar protegido por la ley. En ese sentido, en Medellín, varias organizaciones sindicales, junto con el Comité Intersindical de Salud Ocupacional “COISO”, se unieron y conformaron el Comité de Defensa de la Estabilidad Laboral Reforzada, con el propósito de articular un trabajo a nivel nacional de denuncia y movilización y desde ya se han elaborado escritos dirigidos al Congreso de la República, solicitando el archivo del proyecto por inconveniente.

Los trabajadores estamos conscientes que la precarización del trabajo es todo un cometido de esta élite neoliberal, y por ello nos movilizaremos para defender los derechos adquiridos pero también para llamar a amplios sectores de la población trabajadora informal precarizada a la lucha sin cuartel contra el capital y sus adesios. EC

El genocidio como parte del paisaje

Por Rubén Darío Zapata



17

El jueves 29 de octubre el líder indígena y senador de la República por el partido MAIS, Feliciano Valencia, sufrió un atentado del que, por fortuna, salió ileso. El mismo Valencia informó de la noticia por sus redes sociales y mostró los huecos que dejaron en su vehículo tres impactos de bala. Los noticieros del mediodía y algunos periódicos, sin embargo, presentaron la noticia con reservas: “Según el senador Valencia, se trató de un atentado”, como si pusieran en duda que realmente se trataba de un atentado y quisieran así restarle importancia.

Todo un reguero de víctimas

El mismo día del atentado al senador Feliciano, en horas de la tarde, fue asesinado el médico tradicional y líder de su comunidad Pompilio Narváez, en el municipio de Argelia-Cauca, la misma región donde tres días antes había sido asesinado el líder Carlos Navia. Al otro día la noticia de este asesinato fue opacada por otra que informaba de otros dos asesinatos de líderes sociales en los departamentos de Nariño y Putumayo. Así las cosas, cada día el estupor que produce un asesinato de un líder social es remplazado simplemente por el horror ante uno nuevo.

Una semana antes del atentado contra el senador Valencia, concretamente el 25 de octubre, fueron asesinados en el municipio de Corozal, departamento de Sucre, cinco personas. Cuatro de ellas habían sido víctimas de desplazamiento y estaban en el proceso de reclamación de sus tierras robadas, el otro era su abogado. En el momento de su asesinato estas personas se encontraban reunidas precisamente para iniciar acciones judiciales para la devolución de sus tierras. Ese mismo día, hombres armados se pasearon por zona rural del poblado de Yurilla, en Puerto Leguizamo, Putumayo, y asesinaron a dos de sus pobladores.

La oposición en la mira

A mediados de octubre circuló en Bogotá un panfleto firmado por las Águilas Negras en el que anunciaban que “es el momento de limpiar este país”. Allí les advertían a todos “los que se hacen llamar líderes” y a los seguidores de Gustavo Petro y la Colombia Humana, la voluntad de asesinarlos. Al final culminaban con la amenaza generalizada: “No permitiremos que la escoria de la izquierda triunfe, no llegarán muy lejos sapos H.P de la Colombia Humana”.

Como para que no quedaran dudas, pocos días después, el lunes 19 de octubre, fue asesinado Eduardo Alarcón, líder agrario y exconcejal del municipio de Campo Alegre, Huila. Alarcón era

un destacado militante de la Colombia Humana en el departamento del Huila.

Al otro día fue asesinado en el departamento del Cauca, en la vía que conduce de Popayán a Coconuco, el reconocido líder social y político Gustavo Herrera. Herrera había sido el gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en ese departamento.

Ya antes, a mediados de septiembre, había sido asesinado en Medellín Campo Elías Galindo, considerado por muchos el nervio de la Colombia Humana en esta ciudad. Ante esta evidente persecución hacia el movimiento político de oposición se pronunciaron varias figuras de la política nacional, y el mismo Gustavo Petro con otros líderes del movimiento pidió una reunión urgente con el presidente de la República, Iván Duque. Pero a la hora de escribir esta nota, dicha reunión todavía no se había concretado.

También los ambientalistas

Un día antes del atentado contra el senador del MAIS, fue asesinada en el municipio de Nuquí, Chocó, la líder ambientalista, Juana María Perea. La mujer había llegado a Nuquí hacía siete años y desde entonces se había convertido en una destacada lideresa ambientalista que luchaba por la conservación de la biodiversidad de aquel territorio majestuoso, promoviendo también el turismo ambiental respetuoso y regulado. En el último tiempo se había destacado como lideresa del movimiento que se oponía a la construcción del puerto de Tribugá, precisamente por los tremendos daños ambientales que ello traería.

El primero de octubre, las Autodefensas Gaitanistas habían empapelado todo el caso urbano de Nuquí con las amenazas a los líderes sociales y a quienes se oponían, supuestamente, al desarrollo. Y 15 días antes del asesinato de Juana fue asesinado otro líder opositor al proyecto.

Es cierto que el proyecto de construcción del puerto quedó archivado desde finales de septiembre porque la Agencia Nacional de

Infraestructura- ANI juzgó que la empresa que se proponía para construirlo, la Sociedad Promotora Proyecto Arquímedes S.A., no cumplió con los requerimientos de seriedad. En realidad, esta decisión era también una respuesta a la presión social promovida por distintas organizaciones ambientalistas, igual que ocurrió por los mismos días con el proyecto de explotación minera en Santurbán.

En Santander todavía no se hacen sentir las reacciones contra la población que hizo tumbar el proyecto de explotación minera en el páramo; en Chocó, en cambio, las represalias empezaron de manera inmediata y una de sus más crueles manifestaciones ha sido el asesinato de algunos de sus líderes, aparte de la amenaza generalizada a la población. Los efectos de dichas amenazas también empiezan a sentirse. Muchos de los que hacían parte del grupo de wasap creado para oponerse al proyecto del puerto de Tribugá han empezado a retirarse silenciosamente. Ese es el resultado que buscaban precisamente los asesinos.

El estribillo repetido

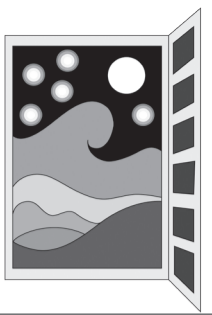
El asesinato de líderes va en ascenso y cada vez parece convertirse más en parte del paisaje. Según la organización Somos Defensores, en el primer semestre del 2020 el asesinato de líderes sociales en Colombia aumentó en 61% con respecto al mismo periodo del 2019. Cabe resaltar, que fue precisamente después de agosto que arrieron con más fuerza los crímenes contra líderes y defensores de derechos humanos en el país.

Lo preocupante es que este panorama no parece encontrar una respuesta seria y contundente por parte del gobierno. En muchos casos incluso se empeña en negar la magnitud del problema presentando informes con cifras menores de las que presentan las organizaciones defensoras de derechos humanos. Últimamente el gobierno ha recurrido al argumento de que los líderes asesinados no son realmente tanto, esto atendiendo supuestamente a que muchos de ellos no son certificados como líderes por la ONU, como si esta entidad efectivamente pudiera certificar quién es y quién no un líder social.

Por otra parte, sus declaraciones parecen recitadas de un libreto aprendido hace tiempo: aun sin mediar investigación alguna, los asesinatos siempre se les atribuyen a estructuras armadas del narcotráfico y el presidente asegura haber pedido a las autoridades competentes acelerar las investigaciones y dar con los responsables. Este, sin embargo, es el momento en que no se conoce ningún resultado frente a las diversas masacres ejecutadas en el mes de septiembre, a pesar de haber ocurrido en territorios con alta presencia de la fuerza pública.

Lo que han demandado siempre del presidente las organizaciones defensoras de derechos humanos es que cumpla con el punto del Acuerdo de la Habana donde el Estado, en cabeza del presidente, se compromete a crear y dirigir la Comisión Nacional de Garantías, para desarticular las estructuras paramilitares. Y se quejan precisamente de haber encontrado siempre oídos sordos y acciones muy débiles. ©





La injusta calificación del Sisbén se ensaña con Abelardo

Por Luz Celina Alcaraz

Abelardo es un viejo de ojos picarones, sincero, de vida transparente, buen conversador, buen narrador de historias, convencido de su fe. Nació entre afiladas montañas, y se crio entre las rosas maiceras, yucales, plantíos de arracachas, frondosas frisolerías de vida y el cantar de los ríos vecinos. Fue un hombre rudo para el trabajo y un aserrador experto en el manejo del serrucho gigante de los altos aserríos situados en la mitad de los montes abriaquiseños. Conocedor, como ninguno, de las texturas de los árboles maderables en los bosques nativos. En su rebotante juventud produjo tablas, largueros, vigas y alfardas para la construcción de casas de sus coterráneos.

Músico y cantante de afición, interpretó la guitarra y el violín, el cual conserva en su estuche colgado en la pared de su cuarto. Cuando la demencia hizo su aparición, recorría los caminos cantando en noches de luna llena, haciendo sonar la guitarra, sentado en las piedras cercanas al río. Era su ritual, todos lo sabíamos, y escuchábamos con atención esas melodías lejanas, sus compañeras, surgidas de las evocaciones inseparables de sus delirios mentales.

Con el pasar del tiempo quedó viudo, y sus hijos, salvo uno, escaparon de ese nido paterno vecino del río Herradura. La vida de Abelardo transcurre ahora entre cafetos, platanales, pastos y una que otra vaca.

No pegó en Medellín

Sus hijas optaron por llevárselo para Medellín para cuidarlo. Iniciaron la tramitología para sacarlo del Sisbén (régimen subsidiado de salud). En una tarde en Abriaquí gestionaron todo, quedando también por fuera del subsidio del adulto mayor.

La ciudad no convenció a ese Abelardo acostumbrado al campo, al sonido del río, a sus paseos por los parajes campesinos, a sus vecinos conocidos. “No pegó en Medellín” y se devolvió a su tierra querida, más desprotegido que nunca. Bordeando los 87 años vive solo, añorando la platica del Sisbén con que cubría algunas necesidades.

Cierto día me visitó y me dijo: “se me llevaron la cédula hace tiempo para ayudarme a recuperar el subsidio, pero no me han dicho nada y la cédula no retornó”. Lo observé desmejorado, enjuto, había comenzado la tormenta de los dolores articulares, eternos enemigos de los viejos, y sus ojos adoptaron la mirada triste, la mirada lejana. De aquel fortachón conversador, alegre, que conocí hace un buen número de años, solo quedaba el recuerdo. Y para que la tragedia la sintiera con más ahínco, se veía a sí mismo como un extranjero en su tierra, con la cédula secuestrada por una funcionaria negligente que no le daba importancia a la indocumentación de un viejo.

Un reclamo de justicia

Al adulto mayor pobre “no se le paran muchas bolas” en este país y la mayoría de las veces solo generamos “asco”. Lo digo con conocimiento de causa. Así que decidí gestionar, impedir su abandono.

El gerontólogo encargado de los programas para el bienestar de los adultos mayores me explicó los requisitos para ser reinscrito al Sisbén. Abelardo cumplía la mayoría de ellos. Pero la encuesta del Sisbén realizada el 18 de octubre de 2018 excedía en una centésima el puntaje requerido para ser beneficiario, así:

Área	Nivel 2
Rural	33,99 – 35,26
Abelardo-----	35,27

Esta centésima de más, (0,01) respecto del puntaje máximo de 35,26, marcaba su exclusión para el beneficio económico, y “significa” que no es pobre para los burócratas. El gerontólogo fue contundente: no se puede tramitar su inclusión, el puntaje lo impide. Así se cumplió aquel dicho: “Sentencia de garitero, apelación a los infiernos”. La centésima podía ser el margen de error en la encuesta.

A pesar de que Abelardo es una persona con una vulnerabilidad especial por su discapacidad psíquica, quedaba por fuera del programa Colombia Mayor que le daría \$80.000 mensuales para “mejorar su calidad de vida”.

El trámite de una lotería

La funcionaria del Sisbén de Abriaquí fue muy enfática: “lo que se puede hacer es una re-encuesta al

hogar de Abelardo, pero no se garantiza que baje la centésima, antes, por el contrario, puede subir. Los administradores del Sisbén entrevistamos, llenamos los cuestionarios, los enviamos a Planeación Nacional y allí ponen el puntaje”. Bueno, pensé, “del ahogado el sombrero” y le envié la documentación requerida.

Ella inició el trámite presentando una solicitud a Planeación Nacional de re-encuesta para este potencial beneficiario. Si el puntaje le queda en el rango exigido, el gerontólogo solicitará su afiliación nuevamente al subsidio del adulto mayor. Después ingresará a una lista de espera, porque puede haber muchos solicitantes delante de él. Todos los anotados en la lista tienen que esperar que vayan muriendo algunos beneficiarios para poderse afiliar. No hay cobertura universal para ese subsidio.

Demasiada tramitología por una mísera centésima. Cero humanismo. El Sisbén debería tener en cuenta casos excepcionales de inclusión, mirar las condiciones particulares. La incapacidad material y mental es una vulnerabilidad especial ante determinados riesgos.

El Sisbén: “vulnerabilidad” de aprovechados, de colados

El régimen subsidiado de salud creado por la ley 100 de 1993, tiene como instrumento técnico el Sisbén que es un sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales que clasifica a la población de acuerdo a sus condiciones socio-económicas. La puerta de entrada al régimen subsidiado para pobres es el Sisbén, cuyo objetivo básico es “mejorar la calidad de vida y dar prelación a los más débiles”. Pero muchas veces la inclusión tiene mayor número de colados de estratos superiores y hasta de congresistas, según se informa en el portal (<https://corrupcionaldia.com/lo-no-visto-en-corrupcion-congresistas-con-sisben/>), y baja proporción de afiliados en los estratos 1 y 2.

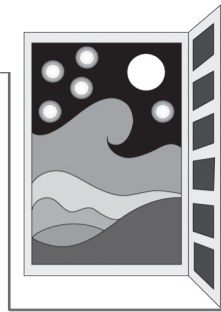
El Sisbén ha sido utilizado políticamente sobre todo en campañas electorales y ha coonestado con conductas corruptas; las prácticas clientelistas sesgan los procesos de afiliación y selección de beneficiarios tal como lo ha denunciado la prensa (<https://www.radionacional.co/noticia/hay-una-nueva-modalidad-de-fraude-electoral-con-el-sisben-planeacion>).

Hay una larga cadena de favorecidos de subsidios que pueden pertenecer al régimen contributivo y que acceden en forma fraudulenta (<https://www.larepublica.co/opinion/editorial/es-tambien-corrupcion-colarse-en-el-sisben-2475266>). Los subsidios -insuficientes para mejorar el nivel de vida- para los más vulnerables se pierden, además, por las dificultades y deficiencias en la aplicación del Sisbén en muchos municipios. La falta de cobertura y presupuesto son falencias predominantes.

Ser sisbenizado es la marca que identifica al pobre. Abelardo la tiene y ni siquiera recibe el infeliz subsidio del programa “Colombia Mayor”. De acuerdo con las estadísticas del Banco Mundial, Colombia ha hecho hasta lo imposible por alcanzar el récord de ser el 4º país más desigual del mundo.



Pintura tomada de historias y relatos



Memoria en disputa

Por José Abelardo Díaz Jaramillo

Lo dicho por el presidente de la república, al referirse al registro creciente de masacres en el país, pone de presente hechos que no deben soslayarse, so pena de contribuir a la debacle moral de la nación. El caso mencionado ejemplifica la importancia del lenguaje para nombrar cosas y dotarlas de sentido.

La operación (cambiar una palabra por otra para referirse a un hecho específico y así restarle su efecto real) es una oportunidad para poner al descubierto intenciones políticas perversas, a la vez que constata la indiferencia ante la tragedia ajena. Que no son masacres sino homicidios colectivos los ocurridos en las últimas semanas, pone de manifiesto el propósito de confundir a la ciudadanía, y casi que obliga a que, como en los tiempos en que Macondo era apenas una aldea, las cosas deban señalarse con la mano para poder ser identificadas y entendidas.

Los eufemismos, lo sabemos, son un recurso al que los políticos suelen acudir. Aquí mismo, en Colombia, no hace mucho hubo un presidente que ordenó a sus subalternos no emplear el termino *conflicto armado interno*, y en cambio, sí utilizar la expresión *terrorismo* o *amenaza terrorista*, para referirse al estado de guerra permanente originado por causas estructurales (pobreza, desigualdad). Para fortuna del país y, en especial, para sus gentes agobiadas por la guerra, aquella artimaña lingüística tuvo su tiempo, y los hechos mismos han desmentido la forzada argumentación.

En la misma dirección se inscribe el negacionismo histórico, que consiste en una acción consciente de intervenir el pasado en función de propósitos variopintos: justificar un orden político injusto, moldear un hecho histórico (hasta el punto de poder borrarlo de cualquier registro), invisibilizar o exagerar la participación de actores específicos, sobredimensionar o imponer valores políticos, económicos y religiosos de ciertos grupos sociales, en detrimento de otros.

Este tipo de operación tiene un rasgo particular y es su fina vinculación con formas de poder, como el Estado. De hecho, el negacionismo histórico es fuerte cuando es cultivado abierta o de forma solapada por o desde el Estado (o los gobiernos), en tanto que este dispone de mecanismos (instituciones, medios de comunicación, intelectuales, presupuestos económicos) capaces de imponer una visión del mundo que se ajusta a intereses particulares. Significa, además, que el Estado puede ser factor de olvido, si se lo propone, o

lo contrario, una instancia que promueve ejercicios de memoria.

Lo ocurrido en Colombia en los últimos años no ha sido otra cosa que el despliegue de una política de intervención sobre el pasado en sus dos variantes más visibles (historia y memoria), lo que ha dado origen, no sin obstáculos, hay que decirlo, a una *memoria emblemática* que pretende institucionalizarse, es decir, transformarse en hegemónica por la vía de políticas oficiales e iniciativas de memoria. Así, en poco tiempo Colombia perdió lo mucho o poco que se había alcanzado en torno a temas como la importancia de la verdad histórica sobre el conflicto armado, y una instancia como el Centro Nacional de Memoria Histórica fueron sometidas a un escarnio mediático para entorpecer la labor para la que fue concebida: encontrar en el pasado explicaciones (múltiples, no hegemónicas) al contexto de guerra que ocurrió y existe en el país.

No es casualidad, por tanto, que el Centro Nacional de Memoria Histórica-CNMH sea dirigido por un individuo (Darío Acevedo Carmona) que en distintos escenarios públicos ha negado la existencia del conflicto armado en Colombia, y ha orientado toda la política investigativa del centro (incluyendo recursos económicos) a fortalecer la tesis del sociólogo francés Daniel Pécaut, quien ha señalado que lo ocurrido en el país fue una guerra contra la sociedad, a la vez que ha otorgado a sectores como las Fuerzas Armadas y empresarios la condición de víctimas y no de victimarios.

Ahora bien, reconocer que existe la pretensión de imponer un tipo de memoria no significa, en modo alguno, que, al final, prime o se imponga ese interés. De hecho,

lo que suele ocurrir es que en un contexto social se crucen diversas formas de memoria que, en algunos casos, pueden coexistir y dialogar, y en otros, excluirse y confrontar simbólicamente. Se configuran así disputas en escenarios públicos entre memorias dominantes/ hegemónicas y memorias subalternas/ disidentes. Por cierto, la reciente ola de destrucción de monumentos en varios países (y la más reciente en la ciudad de Popayán), ejemplifica de qué modo ciertas sociedades confrontan la manera como se ha evocado el pasado.

Desde hace tiempo, en Colombia se observa, particularmente en el plano de la vida pública de los sectores que fueron golpeados por la guerra, una voluntad por hacer/cultivar la memoria, operando bajo la premisa de que, solo así, podrán constituirse en sujetos de derechos y lograrán recuperar la dignidad perdida. Más que víctimas, se reivindican como seres humanos que reclaman condiciones de existencia basados en la igualdad. Una mirada a esas iniciativas evidencia el interés de no olvidar las experiencias traumáticas y hacer del recuerdo un recurso emotivo para fortalecer sus historias de vida, sus tradiciones y perfilar su papel como actores sociales.

Lugares de memoria como el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en Bogotá, el Museo Casa de la Memoria en Medellín, el Centro de Memoria del Conflicto en Valledupar (CMC), la Casa de la Memoria de Tumaco y la Costa Pacífica Nariñense, la Casa de la Memoria Triana en Buenaventura, la Casa de la Memoria de El Salado, el Museo Comunitario Tras las Huellas del Placer en Putumayo, el Museo Itinerante de la Memoria de Montes de María o el Salón del Nunca Más en Granada (Antioquia), testifican iniciativas comunitarias e institucionales para pensar la memoria y destacar su importancia social. En la misma dirección,

debe mencionarse la Red Colombiana de Lugares de Memoria, una instancia social, comunitaria y participativa constituida por lugares de memoria de origen comunitario y gubernamental.

Tantos ejercicios de construcción / preservación / intervención de la memoria, promovidos desde el Estado y desde los márgenes por sectores de base, ilustran la tesis que señala a la memoria como un campo en disputa, cuyo resultado (siempre reconfigurado, ya que se trata de una disputa no finita y permanente) incide en la visión y actuación de quienes toman parte en los enfrentamientos simbólicos por el pasado. ©

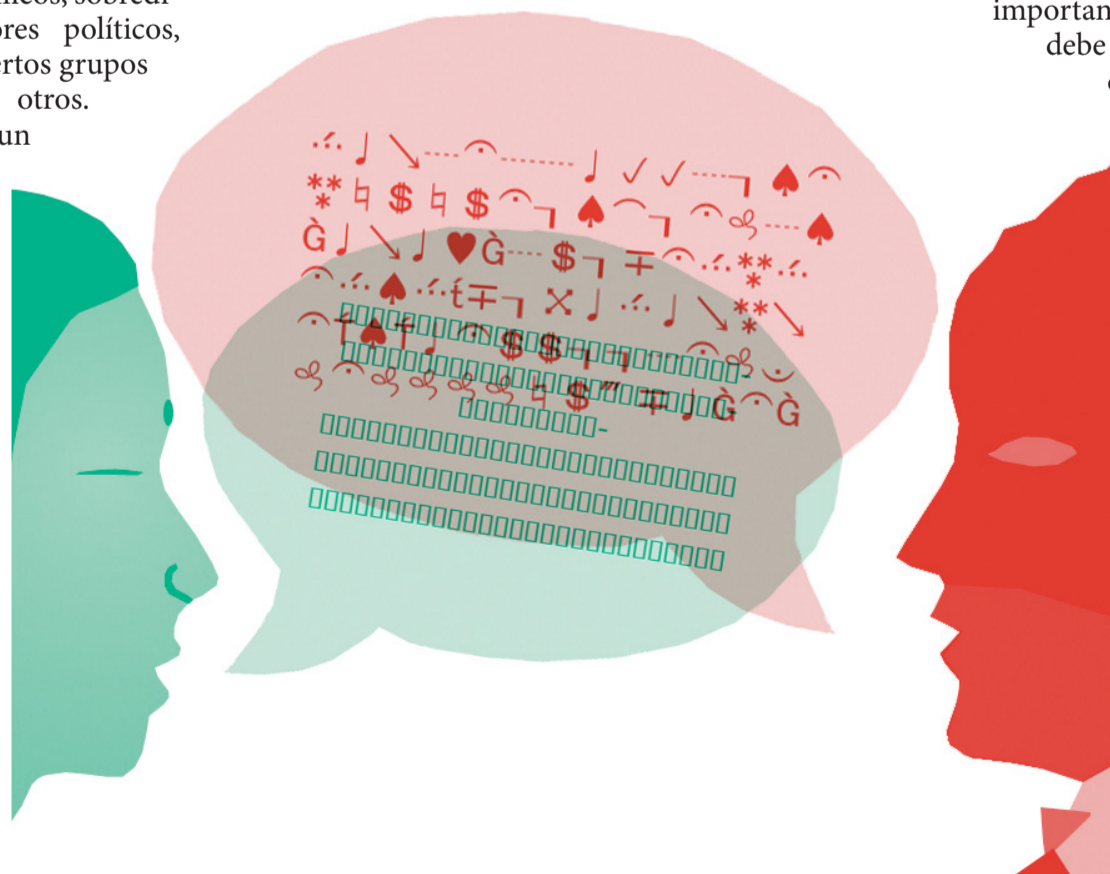
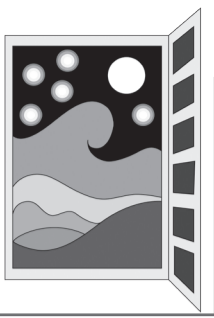


Ilustración: Abaldewy bajo la licencia Creative Commons



20

También eran pájaros

Llovían pájaros sobre jaulas con candados,
la ciudad emplumada era una nebulosa marea de espumas aladas.

No, no respiro
no seduce el paisaje,
mi garganta asfixiada no reclama su voz.

Mis ojos se enmudecen,
evaden la realidad con su filtro
oscuro y afranelado.

Hay pájaros muertos
sobre los parques, en las copas de los árboles,
en mi ventana se aglutinan picos y alas,
y pequeños ojos que ya no miran, que ya no cantan.

Nos han llovido pájaros
sobre las vidas,
y el impacto de ella los ha matado.

Frágiles
cantos,
vuelos,
alas,
pájaros,
Qué no cantan...
Qué no vuelan...w
Qué no suben...

Su cielo inexistente los ha asfixiado,
Con su brutal oxígeno de muerte.

Poca

Me negaron la paz,
y soy guerra...
Me callaron la boca
y mis manos gritan
chorreando tinta roja...
Me taparon los ojos,
y mis oídos formaron
imágenes vivas,
vibrantes y
de brillantes colores...

Me llamaron poca...
y sobro por donde paso...
Me cortaron las alas,
y florecí entre gladiolas
que bailan sobre el viento...

Soy lluvia y sol,
brisa
y tempestad,
soy la gota de agua
que baja y se vuelve mar.

Libertad

Sé mi musa. ...
nosotras también las necesitamos.
Sé mi musa de noche
cuando el insomnio llena los poros
de esta piel oscura...
Sé aquella estrella fugaz
que me espía dentro de la taza
de un café mañanero.
Sé mi musa desnuda
al borde de una flor
de pétalos rotos.
Sé mi musa...
yo también quiero llorar
tu ausencia.
Sé mi musa y canta
conmigo mientras las lágrimas
ruedan en mis mejillas.
Sé mi musa
esa que se refleja detrás de mí
en ese espejo roto.
Por favor
sé mi musa.



María Selene Rico Hernández. Ciudad de México, 1976.

Nombrar es abismar el alfabeto en los oficios necesarios. Entre la A y la Z se martillan “erres” y “eles” al filo de la vida. Vienen tormentas y “huracanas” guerreras que alimentan la claridad de nuestros tiempos, fungen como dagas cambiando el filo de la historia con sed de justicia, crecen en cascadas que lavan la terquedad de la piedra y purifican sus grietas con el mismo alfabeto que les niega la magia de ser completas y necesarias en la construcción del universo.

María Selene hace parte del proyecto de R3MORAS música y poesía de autor. Es tormenta y huracana en el oficio de aniquilar el oxígeno de la muerte, de buscar y seguir el curso de la esperanza terca y necesaria como el alfabeto de la vida.



María Cano

La Flor Rebelde



María de los Ángeles Cano Márquez nació en Medellín el 12 de agosto de 1887. Hija de Rodolfo Cano y Amelia Márquez.




Autodidacta, siguió el pensamiento liberal de su padre quien la orientó en su formación primaria.



Así es, hija mía, solo el estudio nos hace libres.

María Cano fue la primera lideresa política del siglo XX en Colombia.



Un mundo nuevo surge hoy de la epopeya de la libertad. Nutrida con sangre, llanto y tortura...

Defendió la lucha por los derechos de la clase obrera y de la mujer.

En 1926 encabezó la convocatoria y agitación de las huelgas obreras, difundió las ideas socialistas, y participó en la formación del PSR (Partido Socialista Revolucionario)



De 1927 a 1928 realizó una intensa actividad propagandística por toda Colombia.

1923. Apoya a los campesinos de Viotá en su lucha por la tierra.



8 horas de trabajo, 8 horas de estudio y 8 horas de descanso

Fundando "El Socorro Rojo", escribiendo para la revista "Cyrano" y el periódico "El Liberal". Impulsando la expresión "los 3 ochos"




El 5 de diciembre de 1928. El gobierno de Miguel Abadía Méndez reprime una huelga de bananeros en Ciénaga, Magdalena.



Hecho conocido como "Masacre de las Bananeras".

Después de la masacre, María Cano fue detenida y encarcelada. Acusada de ser una de las incitadoras de la huelga. Estos hechos y la recesión de 1930 provocaron la terminación de las labores del CONGRESO NACIONAL OBRERO y el fraccionamiento del PSR. María se vinculó como obrera de la imprenta departamental de Antioquia en 1930, y luego pasó a trabajar a la biblioteca departamental donde laboró hasta 1947.

María Cano murió el 26 de abril de 1967 a la edad de 79 años,



un día antes de recibir la medalla que en su honor había aprobado el Concejo de Medellín como una de las mujeres destacadas de Antioquia. ¡Gloria eterna a su memoria!



Quintín Lame y su legado

22

Por Chucho Rivas

“Una de las principales razones que tienen los blancos para mantenernos en la opresión económica en que vivimos, más que el deseo de adueñarse de nuestro trabajo y de vivir del sudor de nuestras frentes, es el temor de que algún día podamos ser fuertes, capaces de reclamar con la fuerza nuestros derechos y de tomar nuevamente posesión de las tierras que fuimos despojados violentamente”. Manuel Quintín Lame.

Hablar de Quintín Lame es hablar de la lucha del pueblo Nasa y de otros pueblos indígenas del sur y centro-occidente colombiano, es hablar de la lucha franca y abierta de los pueblos indígenas en pro de la dignidad, el reconocimiento y la reconquista de los derechos arrebatados desde tiempos inmemoriales y que aún hoy se desconocen o mancillan por parte del Estado y las clases dominantes colombianas. De allí que Quintín Lame sea la figura más reconocida y emblemática en el ámbito del movimiento de resistencia indígena durante el siglo XX y aún en la actualidad, cuando le rinden memoria, siguen y reproducen sus enseñanzas en los procesos de “liberación de la madre tierra”, como lugar de encuentro, unidad y movilización, y particularmente en la Minga indígena como el gran espacio de pervivencia, resistencia y persistencia, convirtiendo la Minga en la dignidad que camina, ejemplo para el conjunto del movimiento popular colombiano.

Quintín Lame encabezó, desde principios del siglo XX, la lucha muy desigual del pueblo indígena del suroccidente colombiano por la recuperación de sus tierras, inscrita en un acumulado de factores históricos que se entrecruzaron para debilitar y cambiar las formas de resistencia, primero, por las consecuencias de debilidad, desarraigo y colonización impuestas por la derrota militar ante los invasores españoles; segundo, tras la independencia de España, por las políticas y normas anti-resguardo, como en el caso de algunas leyes dictadas en 1810, 1821 y 1850; y, por último, ante el despojo por parte de los terratenientes, en contubernio con las autoridades y gamonales locales desde el siglo XIX.

En 1910, Quintín Lame fue elegido “Jefe, Representante y Defensor General” de los cabildos indígenas de Pitayó, Jambaló, Toribío, Puracé, Poblazón, Cajibío y Pandiguando, cuando surgía un nuevo sector comercial agrario que expropiaba sus resguardos y era legitimado por unas leyes que promovían la liquidación de los resguardos. Lame retomó buena parte de las luchas históricas dadas por los grandes líderes que le antecedieron, principalmente las del cacique Manuel de Quilo, buscando desde el “derecho preferencial” la prevalencia en la propiedad de los pueblos originarios sobre el territorio habitado; del legado de Juan Tama retomó la lucha por unificar a su pueblo en torno a la autonomía política, resaltando al Cabildo indígena como base de autoridad y centro de organización. Además, como complemento y particularidad de la fase de resistencia iniciada en el Cauca por Quintín Lame, se destacó



Ilustración: Tomada de polimorfo.org

su lucha por la unión de los paeces con otros pueblos en el Huila y Tolima, cuando se dio cuenta que el derecho burgués, tantas veces reclamado por él, en Bogotá no se aplicaba.

Manuel Quintín Lame resume en buena medida las luchas de los pueblos ancestrales del siglo XX. Ya en su despuntar durante la guerra de los mil días, en la que participó (1899-1903), comenzó a formarse de manera empírica en leyes para defender a su pueblo de la trapacería judicial del Estado colombiano al servicio de los terratenientes, una lucha que lideró incansable y constantemente, combinándola con la educación, organización y movilización en los resguardos y aun en otros poblados donde los indígenas (principalmente terrajeros) eran vilmente explotados, discriminados y oprimidos. Una lucha que le costó la persecución continua y el encarcelamiento en cerca de doscientas ocasiones.

Con este ideario, Quintín Lame luchó liderando en el Cauca y Huila a sus hermanos nasa hasta 1920; luego, tras el acoso, encarcelamiento y persecución constante por parte de los hacendados y políticos locales en el Cauca, en cabeza de José Gonzalo Sánchez, se dirigió hacia Huila y Tolima y orientó su trabajo principalmente hacia la reconstrucción de algunos resguardos liquidados en el siglo XIX, como fue el caso del resguardo de Ortega y parte del de Chaparral en Tolima, entre 1920-1939; dicho movimiento duró hasta 1953, cuando la ofensiva terrateniente en tiempos de la “Violencia” lo debilitó. En sus últimos años, Quintín Lame se dedicó a escribir memoriales. Murió en 1967, pero sus banderas continúan enarboladas por los nasa y otros pueblos indígenas hermanos del suroccidente colombiano.

Gonzalo Castillo Cárdenas sintetiza las principales luchas de Lame de la siguiente manera: la defensa de las Comunidades indígenas y su indivisibilidad; la consolidación del Cabildo como base político-organizativa; la recuperación de las tierras robadas, desconociendo los títulos no basados en cédulas reales; la liberación de los terrazgueros, negando el pago de renta de la tierra en trabajo; y “la afirmación de los valores culturales indígenas y rechazo a la discriminación racial y cultural a que son sometidos los indios colombianos”.

La figura de Quintín Lame reaparecerá como un gran eco ensordecedor para los oídos y los odios oligarcas del suroccidente colombiano y del Tolima, aún después de su muerte en 1967. Primero, bajo el ejemplo del padre indígena Alvaro Ulcué Chocué, que acompañó y alentó la recuperación de tierras indígenas, al tiempo que enfrentó y condenó a los terratenientes y gamonales locales, lo cual le valió la muerte a manos de sicarios el 10 de noviembre de 1984, un día después del desalojo de una toma indígena en Corinto que Ulcué apoyó y dos días luego de haber afrontado en su casa cural las acusaciones por parte del ministro de defensa y dos generales más de instigar las “invasiones de tierras”.

Y Quintín reaparecerá inmediatamente después, ya en la forma de milicia, como la primera guerrilla indígena en América Latina, la cual llevaba su nombre: “Movimiento Armado Quintín Lame”, que operó entre 1984 y 1991. Es como si su espíritu ancestral persistiera a través del tiempo y no quedase satisfecho hasta no cumplir sus ideales de lucha.

¡Honor y gloria al gran Quintín Lame! ☪



En memoria de Cristina Bautista, Ombligarnos a la tierra para liberarnos con ella

23

Vilma Almendra-Comunidad Nasa

Nuestros pueblos siguen siendo negados y silenciados. Se reitera, una y otra vez, la disputa patriarcal contra nuestras autonomías. Somos producto de un sistema patriarcal, colonial, estatal, racista que se manifiesta desde la institucionalidad establecida hasta nuestros haceres comunitarios. En esa trama, a nosotras nos violentan afuera y dentro de nuestras casas y luchas. En memoria de Cristina Bautista Taquinás y de toda(o)s nuestra(o)s muerta(o)s, reitero su afirmación en urgencia de reciprocidad entre palabra y acción: “La mujer es fundamental y la cosmovisión lo plantea, solamente falta que se cumpla”.

Las luchas de Cristina

El 29 de octubre de 2019 fue masacrada la compañera Cristina Bautista Taquinás, junto a Asdrúbal Cayapu, Eliodoro Finscue, José Gerardo Soto y James Wilfredo Soto. Ella ejercía como autoridad tradicional del resguardo indígena de Tacueyó y ellos como guardias indígenas, comprometida(o)s con el cuidado del territorio y la defensa de mandatos colectivos frente al despojo. Mientras ejercían control territorial fueron emboscados por actores armados que se disputan los corredores del narcotráfico y que asesinan a todo aquel que se niegue a la mafiosidad y exija libertad para sus pueblos. A un año de la masacre todo es “materia de investigación”, no hay claridad de los hechos ocurridos, no hay capturas de los actores materiales ni intelectuales y la familia Bautista Taquinás ni siquiera ha recibido los resultados de su necropsia.

Su vida como mujer de una familia y una comunidad empobrecidas, fue una lucha. Desde muy niña aprendió a rebuscarse para cuidar a sus hermana(o)s y “ganarse la vida”. En la escuela le pidieron media libra de arroz y como no tenía se retiró. De 12 años salió de su resguardo y se fue como empleada doméstica a la ciudad. Fue maltratada por mujeres y una vez un patrón intentó violarla. Gracias a una amiga, llegó a trabajar donde una anciana que la trató como una hija y le ayudó para que estudiara. Enfrentó muchos desafíos y peligros, pero logró graduarse como Trabajadora Social. En ese camino, supo que Toribío ocupaba uno de los primeros lugares en violencia contra las mujeres en toda Colombia, entonces decidió volver a su territorio. Inicialmente su palabra consecuente con su acción fue ignorada. Por ser mujer y joven Cristina fue rechazada por un liderazgo macho.

Aún así, Cristina Bautista Taquinás continuó su misión de vida visitando, escuchando e intercambiando con las mujeres (reactivó el Movimiento de Mujer Nasa Hilando Pensamiento). También desde Atención a Víctimas del municipio de Toribío y por fuera de esa institucionalidad se acercó más a la comunidad. No impuso sus creencias cristianas, pero sí sintió con el corazón las violencias contra mujeres, jóvenes

y niña(o)s. Sus aportes fueron excepcionales como voluntaria, incluso en el proceso de la Constituyente Nasa, donde inicialmente la rechazaron porque no llevaba el aval ni estaba en el grupo selecto, pero desde la perseverancia y humildad continuó participando y, para ello, hasta llevando su almuerzo. Pasó de excluida y negada a vocera y redactora de esa iniciativa. De allí empezó a sonar como candidata a autoridad tradicional de su resguardo.

El patriarcado que nos habita

Frente a la posibilidad de que Cristina fuera electa, llegaron a decir: “si gana la falduda se acaba el movimiento”. Pero la comunidad eligió y ella quedó como una de las seis autoridades tradicionales de Tacueyó con una altísima votación. En su corto tiempo como autoridad, hizo un trabajo ejemplar e incomparable. Decía: “Todos somos guardias, pero todos en la acción”, por eso no era extraño verla prestando guardia y sirviendo el café que preparaba. Sin duda, aplicó uno de los principios zapatistas que son un desafío: “servir y no servirse”. Tampoco era extraño que algunos hombres y mujeres autoritarios la irrespetaran, la silenciaran y hasta se burlaran de sus discursos.

Dolorosamente, el patriarcado es más visible y denunciado frente al poder externo que ejercen contra nuestros pueblos y territorios para mercantilizar bienes comunes y acumular riquezas; pero este mismo poder y patriarcado es menos visible y somos más condescendientes cuando se ejerce adentro. Por ejemplo: cuando denunciemos violencias de nuestros compañeros y somos revictimizadas sin lograr justicia. Cuando nos garantizan un cargo condicionado al silencio, obediencia y reproducción de prácticas autoritarias que van

en contra de la colectividad. Cuando nos señalan y excluyen porque hacemos críticas buscando transformaciones comunitarias. Cuando nos señalan como ruedas sueltas porque no nos ajustamos al carruaje desarrollista-progresista-institucionalizado que nos amarra al despojo y nos niega la dignidad.

Pero nosotras también violentamos: cuando obedecemos a proyectos que solo cumplen la agenda global de los Estados y silencian las agendas propias. Cuando reducimos las violencias al machismo y no vemos la relación estructural con el Estado, el extractivismo, el racismo. Cuando capturamos las luchas de las mujeres y las sometemos a la cárcel de los conceptos. Cuando a nombre de nuestra liberación como mujeres nos insertamos en las políticas de muerte presentándolas como políticas de vida. Cuando nos apropiamos de las luchas territoriales para disputar migajas gubernamentales. Cuando nos convertimos en el macho del hogar y sometemos a nuestro compañero por ser hombre. Somos producto de este sistema que resistimos.

Autonomías para florecer

El patriarcado, el colonialismo, el capitalismo, el racismo... erosionan y distorsionan la vida comunitaria. Para pervivir tenemos que saber si estamos reproduciendo estas formas de dominación, o si, por el contrario, estamos buscando resistencias autónomas emancipatorias. Nuestra existencia depende de la capacidad crítica que tengamos para reconocer las formas de dominación cotidianas del machismo heredado de la iglesia y la escuela, y al mismo tiempo, las estructuras que las propician y nos atraviesan en todos los ámbitos. Ya deberíamos asumir que las luchas frente al racismo, clasismo y sexismo son inseparables, entre sí, y del patriarcado, Estado y capitalismo: “no se puede destruir al capitalismo sin destruir al Estado, no se puede destruir al Estado sin destruir al patriarcado”, como dicen las mujeres kurdas. En consecuencia, si queremos pervivir como pueblos tenemos que re-pensar, re-crear, re-tomar, re-existir con autonomía.

“Cuando la autonomía avanza el Estado retrocede”. ¿Cómo ser coherentes y consecuentes cuando nuestros movimientos siguen hechizados con el Estado, con el poder y pretenden cambiar el mundo desde la casa capital? Esta contradicción debería avergonzarnos frente al cuidado de semillas, tierra, agua, fuego, aire, marchas, mingas, trueques, pero también asambleas, congresos, movilizaciones. Cristina Bautista representa y expresa el vuelo sangrante desde las mujeres, desde nuestro pueblo y territorio frente al desafío de hacernos tejido con nuestra Madre Tierra.

Ombligarnos a la tierra para liberarnos con ella y no obligarla con nosotra(o)s a convertirse en mercancía para acumular. EC



Ilustración: @feminasilustradas



Los procesos populares son los escenarios legítimos para construir estrategias y programas políticos de largo aliento que nos ayuden a erigir un mundo a la medida de nuestros anhelos